

Trabajo Fin de Máster

El Trabajo Social en el acogimiento familiar

Autora

Alba Cuartero Moratinos

Directora

María José Bernuz Beneitez

Facultad de Economía y Empresa

2020/2021

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	LA EVOLUCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ESPAÑA	6
2.1	LA LEGISLACIÓN ACTUAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR.....	8
2.1.1	LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR	9
2.1.2	LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	14
2.2	EL PROCESO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ARAGÓN	15
2.2.1.	DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE DESAMPARO	16
2.2.2.	FORMACIÓN PREVIA A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA	17
2.2.3.	VALORACIÓN DE IDONEIDAD A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS ..	18
2.2.4.	SELECCIÓN DE LA FAMILIA DE ACOGIDA	19
2.2.5.	FORMALIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO.....	19
2.2.6.	SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL MENOR EN LA FAMILIA DE ACOGIDA.....	20
2.2.7.	VALORACIÓN POST-ACOGIMIENTO	20
3.	LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS	21
3.3	LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR.....	29
3.3.1	LA FUNCIÓN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA.....	31
3.3.2	LA FUNCIÓN DE VALORACIÓN DE IDONEIDAD A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA.....	32
3.3.3	LA FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS DE FAMILIA DE ACOGIDA Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	34
3.3.4	LA FUNCIÓN EN LA ADAPTACIÓN DEL MENOR A SU FAMILIA DE ACOGIDA.....	35
3.3.5	LA FUNCIÓN EN LA VALORACIÓN POST-ACOGIMIENTO.....	37
4	CONCLUSIONES	39
5	BIBLIOGRAFÍA	42

Resumen

La entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia* supuso un gran avance para el acogimiento familiar. De esta manera se prioriza el desarrollo del menor en un entorno familiar ya sea en el núcleo de su familia biológica como en el de una familia de acogida. Así pues, con el fin de preservar el interés superior del menor y encontrar el entorno más adecuado para él, la Ley 26/2015 introduce la necesidad de que los profesionales valoren la idoneidad de las familias acogedoras. Esta valoración se lleva a cabo por los/as trabajadores/as sociales que forman parte del equipo técnico con la finalidad de evaluar la capacidad de las familias acogedoras para garantizar la cobertura de las necesidades asistenciales, educativas y emocionales del menor y asegurar el entorno más óptimo acorde a las características del mismo. De esta manera, el principal objetivo del presente trabajo es conocer el papel que cumple el/la trabajador/a social en los procesos de acogimiento familiar. De modo que, para lograr los objetivos propuestos se ha llevado a cabo un análisis documental sobre revisión bibliográfica en relación al acogimiento familiar y sobre la función del trabajo social en esa institución.

Palabras clave: menor, acogimiento familiar, Trabajo Social, familias de acogida, interés superior.

Abstract

The entry into force of Law 26/2015 of July 28, on the modification of the system for the protection of children and adolescents, was a breakthrough for foster care. This prioritizes the development of the minor in a family environment either in the nucleus of his or her biological family or in a foster family. Thus, in order to preserve the best interests of the child and find the most suitable environment for him/her, Law 26/2015 introduces the need for professionals to assess the suitability of foster families. This assessment is carried out by the social workers who are part of the technical team. The purpose of this assessment is to evaluate the capacity of the foster families to guarantee the coverage of the care. This coverage includes satisfying the educational and emotional needs of the child and ensuring the most optimal environment according to the child's characteristics. The main objective of this paper is to define the role of the social worker in the foster care process. In order to achieve the proposed objectives, a documentary analysis of the literature review on foster care has been carried out, and the role of the social worker in this institution has been determined.

Keywords: minor, foster care, Social Work, foster family, the child's best interest.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta finales del siglo XX, la primera opción de medida de protección para los menores que se encontraban en una situación de desprotección en España fue la institucionalización. No obstante, se comienza a cuestionar esta medida por las consecuencias negativas que tiene para el desarrollo de los menores (Solé, 2019). En concreto, se observaba que aquellos niños que habían estado en acogimiento residencial mostraban más dificultades para integrarse socialmente que aquellos que habían permanecido en una familia. Por ello, se comienza a promover el acogimiento familiar como principal medida de protección, sobre todo en aquellos niños con menos de seis años (ADAFA, 2017). El acogimiento familiar es una medida que se encuentra dentro del ámbito de Protección de Menores y es concebida para una situación de carácter temporal, separando al menor de su familia de origen e integrándolo en un ambiente familiar adecuado, con el fin de proporcionarle una familia alternativa. El acogimiento familiar en ningún caso trata de sustituir a la familia biológica que sigue manteniendo la patria potestad del menor. Más bien intenta complementar el cuidado del menor en un marco familiar durante el tiempo que sea preciso para facilitar la recuperación de su familia de origen y la posterior reincorporación en ella si fuese posible (IASS, 2020).

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia* (en adelante Ley 26/2015), se comienza a dar preferencia al acogimiento familiar respecto a la institucionalización debido a las consecuencias que se derivaban a los menores y en especial a los más pequeños y así lo regula el art. 21 de la Ley 26/2015 donde se establece que: “con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años”. No obstante, la Ley 26/2015 no ha sido la única ley que prioriza el acogimiento familiar ya que, con anterioridad la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, *de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil* (en adelante LO 1/1996) introdujo en su art. 2: “la prioridad de la permanencia del menor en su familia de origen y la preservación del mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor, y en caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial”.

La promoción del acogimiento familiar y la intervención con la familia biológica para que el menor pueda volver con ella hacen pensar que la familia se constituye como una institución fundamental de la sociedad. Es claro que la familia realiza importantes funciones sociales con el menor, se convierte en el cauce de transmisión de pautas de comportamiento, hábitos, creencias... En definitiva, se considera el grupo idóneo para proporcionar un ambiente seguro al menor y promocionar su desarrollo pleno y armonioso de la personalidad de este y en especial durante los primeros años de vida (Moreno, 2012). Por ello, se priorizará la preservación del menor en el núcleo familiar de origen desde que se declara la situación de desamparo siempre y cuando no sea

contraria al interés superior del mismo. Esto es, se valorarán las ventajas o desventajas del acogimiento familiar y la separación de este de su familia (Moreno, 2012). Pero cuando la situación atente contra el interés superior del menor debido a situaciones graves de negligencia o de desatención, las entidades públicas competentes adoptarán las medidas oportunas y entre ellas, debido a la importancia de la familia en el desarrollo del menor se priorizará la estancia del menor en una familia de acogida (Solé, 2019).

La apuesta decidida de la Ley 26/2015 por el acogimiento familiar frente al institucional hace que se introduzca como novedad la formación de las familias de acogida y la valoración de idoneidad de las mismas. Esto significa que la familia a la que el menor se integra una vez se ha formalizado el acogimiento ha sido evaluada previamente y se ha declarado su idoneidad. Asimismo, la entrada en vigor de la Ley 26/2015 impulsa la creación de un equipo técnico de acogimiento familiar formado por un/a pedagogo/a, un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social y dos educadores/as sociales. Estos profesionales son los encargados de realizar la valoración de idoneidad a las familias, la formación previa al acogimiento, acoplamiento del menor a la familia y, el posterior seguimiento y acompañamiento (Solé, 2019). De esta manera, desde el momento en el que una familia decide formar parte de un proceso de acogimiento familiar aparece la figura del trabajador social. Estos profesionales son los encargados de realizar los procesos de valoración de idoneidad de las familias de acogida. A su vez también se encargan de informar a las familias de las compensaciones económicas que recibirán durante el acogimiento. El Trabajo Social es considerada una profesión fundamental en todos los procesos de la protección a la infancia ya que interviene tanto con los/as menores como con sus familias, biológicas y de acogida, con el fin de conseguir el mayor bienestar de niños y niñas. Los profesionales cuentan con herramientas adecuadas para la intervención con los menores y sus respectivas familias, ya que durante su formación son dotados de estrategias y habilidades teórico- metodológicas para realizar un diagnóstico individualizado, de manera interdisciplinar y con el acompañamiento en las diferentes actuaciones realizadas para conseguir una atención integral a los menores (Código Deontológico de Trabajo Social, 2012).

Hay que indicar, aunque parece obvio, que la valoración que se realiza a las familias de acogida se lleva a cabo tanto si esta mantiene lazos consanguíneos con el menor como si no, es decir, si se trata de familia extensa o ajena. Esta valoración se realiza con el fin de preservar en todo momento el interés superior del menor acogido. Por lo que se tiene en cuenta las características de la situación que atraviesa para que la familia acogedora proporcione al niño un adecuado entorno familiar. El equipo técnico encargado de la valoración, formado por un/a trabajador/a social y un/a psicólogo/a estudiará y valorará la idoneidad de los solicitantes, emitiendo informes relativos a la valoración personal, social y psicológica de estos.

A la vista de los antecedentes presentados, el objetivo principal del presente trabajo de fin de máster es conocer las funciones de los trabajadores sociales en el proceso de

acogimiento familiar, cuando un menor se encuentra en una situación de desamparo y es necesaria la actuación del Estado. Como objetivos específicos se pueden destacar los siguientes: conocer la evolución de la institución del acogimiento familiar hasta la actualidad; analizar la legislación aplicable del acogimiento familiar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico; analizar las funciones que cumple el trabajador social con las familias de acogida.

La metodología para lograr los objetivos es esencialmente documental. De un lado, se ha realizado una revisión de la bibliografía sobre acogimiento familiar y sobre la función del trabajo social en esa institución. De otro lado, se analiza la normativa nacional y autonómica que regula la cuestión con el fin de conocer la evolución de la legislación que protege a estos menores y los mecanismos de regulación. Además, se han realizado varias entrevistas exploratorias con el fin de completar la información documental obtenida. En concreto, se ha realizado una entrevista semi-estructurada a una profesional que pertenece a la Dirección General de Igualdad y Familia del Gobierno de Aragón, y que aportó datos generales sobre las actuaciones llevadas a cabo en los procesos de acogimiento familiar (E1). Posteriormente, se realizó una entrevista a una trabajadora social del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia el cual pertenece al Gobierno de Aragón (E2) y a otra profesional de la Sección de acogimiento y adopción de la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza (E3). Es preciso destacar que, para proteger su identidad, a lo largo del presente trabajo cuando se haga referencia a la información obtenida a través de las diferentes entrevistas se identificarán a las profesionales como E1, E2 y E3.

2. LA EVOLUCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ESPAÑA

Durante la mayor parte del siglo XX, hasta bien entrados los años ochenta, la protección de los menores de edad que se encontraban en un ambiente familiar inadecuado y en situaciones de desamparo apostó por la institucionalización (Bravo, Del Valle, López y Monserrat, 2008). El acogimiento familiar no estaba regulado tal y como lo entendemos hoy en día, sino que existían figuras con las que guarda cierta similitud como la costumbre de confiar niños y niñas institucionalizados a las familias para que se hicieran cargo de ellos. Como principal precedente de la figura del acogimiento familiar puede mencionarse la denominada “colocación familiar”, medida que se adoptó durante la Guerra Civil y que concretamente aparece regulada en la Orden de 1 de abril de 1937 para la atención de los niños huérfanos y abandonados (Ocon, 2003). Dicha Orden estaba recogida e impulsada en el Texto Refundido sobre Tribunales Tutelares de Menores y Protección de Menores de 1948. Entre las medidas de protección que estos Tribunales podían aplicar a los padres que no ejercían los deberes de educación y cuidado de sus hijos se establecía la suspensión del derecho a la guarda y educación del menor. A consecuencia de ello, el niño era entregado a la Junta de Protección de Menores, quien podía colocarlo en un centro de menores o en una familia (Bravo et al, 2008).

A partir de la construcción del sistema público de servicios sociales en los años ochenta van desapareciendo los anteriores mecanismos de protección y en consecuencia estas alternativas de protección a la infancia caminaron en dos direcciones principales: los hogares funcionales y el acogimiento familiar. Por un lado, dentro de la red de centros de menores se produce una transición muy importante hacia el concepto de hogar funcional, que son estructuras de convivencia basadas en recrear ambientes de tipo familiar, donde un reducido número de niños y niñas conviven con sus educadores en un entorno vecinal y utilizando los servicios comunitarios. Estos servicios de acogimiento residencial responden a la necesidad de que los niños y niñas dispongan de un ambiente familiar el tiempo que precisen, que en todo caso será el mínimo imprescindible, para alcanzar el objetivo de regresar a una convivencia en familia (con la suya propia, o en otra mediante acogimiento) (Bravo et al, 2008).

Por otro lado, las políticas de protección infantil, para el caso de niños que deben ser separados de su núcleo familiar, impulsaron la figura del acogimiento familiar (Bravo et al, 2008). En España no se contemplaba la figura del acogimiento familiar como tal, hasta que se introduce en el artículo 173 del Código Civil a través de la Ley 21/1987, *de 11 de noviembre, de Reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en Materia de Adopción y de otras Formas de Protección de Menores* (en adelante Ley 21/1987). A partir de la publicación de la Ley 21/1987, y la consiguiente modificación del Código Civil destacó la novedad de la regulación del acogimiento familiar¹ y, en general, de todo lo relativo a la protección de menores, ya que hasta ese momento venía siendo regulado, de forma no uniforme, por normas administrativas (Moreno, 2012, pp 136-137). Ello supone un impulso del acogimiento familiar en España, con un largo retraso respecto a la mayoría de los países desarrollados.

Así pues, el concepto de acogimiento familiar es propio de la Ley 21/1987 que lo introduce en un marco legal completamente nuevo. Asimismo, esta norma crea también una serie de conceptos² que suponen un punto de inflexión en la protección infantil (Bravo et al, 2008). La Ley 21/1987 concebía el acogimiento como una situación de carácter temporal, separando al menor de su familia de origen e integrándolo en un ambiente familiar o en un centro residencial como última opción, con el fin de poder

¹ El Preámbulo de la Ley afirma que: "...se regula el acogimiento familiar con especial detalle. Esta última es una novedad importante, que tiene su parangón en diversos Derechos europeos y que supone dar rango legal de primer orden a una institución hasta hoy regulada por dispersas normas administrativas".

² A raíz de la Ley 21/1987, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por el de desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática, por parte de la entidad pública competente, de la tutela de aquel en los supuestos de desprotección grave del mismo. Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con el menor, tanto administrativas como judiciales y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, así como de sus correlativas obligaciones (Preámbulo Ley 21/1987).

hacer efectivo el retorno del menor a su núcleo familiar o como periodo de prueba para constituir una futura adopción (Mayor, 2017). De modo que se instaure un nuevo sistema de protección de menores que establece a las entidades públicas como elementos esenciales (Abad, 2020, p 174). Así pues, la entidad pública que tenga competencia en materia de protección de menores podrá hacerse cargo de la tutela de aquellos que se encuentren en situación de desamparo³. Tanto la tutela como la guarda podrán llevarse a cabo mediante el acogimiento familiar o residencial. La Ley 21/1987 a su vez introduce el concepto de interés superior del menor, pero haciendo referencia a la necesidad de contar con su consentimiento para el acogimiento, a partir de los doce años⁴.

2.1 LA LEGISLACIÓN ACTUAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Las medidas para la protección a la infancia fueron prácticamente inexistentes hasta el siglo XX, siendo en la segunda mitad cuando alcanzan su principal periodo de desarrollo normativo a nivel internacional que será progresivamente ratificado e incorporado al marco legal de los diferentes Estados. Las normativas internacionales tienen gran relevancia en el marco legal del acogimiento, ya que estas servirán como precedentes a la normativa nacional que regula las medidas de protección del menor y, en concreto, el acogimiento.

La Declaración de los Derechos del Niño que proclamó Naciones Unidas en su Resolución 1386 el 20 de noviembre de 1959, es el primer tratado internacional en el que se hace un reconocimiento de los derechos de los/as niños/as. Este fue un paso muy importante, ya que se reconocen principios relevantes como los que velan por la seguridad y la no discriminación de los/as niños/as. A su vez, en su principio 6 establece que, “siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material”. Dicho principio tiene gran relevancia en la apuesta por el acogimiento familiar en la legislación nacional que se desarrolla posteriormente.

En segundo lugar, se encuentra La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (en adelante CDN), y en vigor en nuestro ordenamiento desde el 5 de enero de 1991, es el instrumento jurídico fundamental de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia. La Convención es un instrumento internacional obligatorio por el que los estados que la ratifican se comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados,

³ Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material (Art 172 Cc).

⁴ El consentimiento del menor implicará también, indudablemente, la especial valoración de su negativa cuando, aun siendo menor de dicha edad, tenga suficiente juicio.

formando parte del ordenamiento jurídico de los países⁵. La Convención reconoce los derechos humanos de los/as niños/as, definidos estos como personas menores de 18 años, en los 54 artículos que componen el texto se recogen derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Una de las principales novedades es la introducción del interés superior del menor en el art 3⁶ de la Convención en el que se estipula al mismo como criterio rector de todas las medidas a adoptar en materia de protección de menores. De este modo, las autoridades sociales, administrativas y jurídicas han de tener en cuenta el interés superior de los menores cuando tengan que tomar una decisión en relación a ellos. Esto significa que su interés y su bienestar se deben considerar por encima de cualquier otro interés que pueda existir. El principio del interés superior del menor es un conjunto de acciones y procesos que garantizan el desarrollo integral y una vida digna al menor, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Este principio tiene tres dimensiones: derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo y norma de procedimiento. Estas tres dimensiones del interés superior del menor tienen como finalidad asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral (Fernández, 2017, p 41).

2.1.1 LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

La preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección deriva de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por España. En especial de la Convención de Derechos del Niño que marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento de sus derechos específicos, del papel que este desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo. Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, un importante proceso de renovación de nuestro ordenamiento jurídico en materia de infancia. No obstante, y pese al indudable avance que la Ley 21/1987 supuso y a las importantes innovaciones que introdujo, su aplicación ha ido poniendo de manifiesto determinadas lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgación ha hecho surgir nuevas necesidades y demandas en la sociedad.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, *de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil* (en adelante LO 1/1996) surge con el fin de cubrir algunas de las lagunas de la legislación previa y

⁵ En esta línea, es preciso mencionar el artículo 96.1 de la Constitución española que establece que: “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

⁶ El artículo 3 de la Convención Derechos del Niño establece que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

da respuesta a las nuevas necesidades y demandas suscitadas desde la publicación de la Ley 21/1987, abordándose de forma más idónea la protección de la infancia (Abad, 2020). La LO 1/1996 pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el Código Civil. De hecho, es el documento básico que guía las actuaciones de todos/as los/las profesionales en el ámbito de la protección al menor. De innovadora se puede calificar la distinción, dentro de las situaciones de desprotección social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervención de la entidad pública. Las situaciones de riesgo son caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, por lo que se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo. Las situaciones de desamparo son aquellas en las que la gravedad de los hechos aconseja la salida del menor de la familia, por lo que la entidad pública se hace cargo de la tutela del menor y de la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria. Además, la LO 1/1996 introduce como novedad también el interés superior del menor regulándolo como primordial sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado” (Art. 2 Ley 1/1996). Por ello, con el fin de preservar el interés superior del menor en todo momento se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para él sin que atente contra su interés, dando preferencia al acogimiento familiar frente al residencial⁷.

Hasta ahora, la legislación concebía el acogimiento como una situación temporal y por tanto la regulación del mismo no hacía distinciones respecto a las distintas circunstancias en las que podía encontrarse el menor. Mientras que la LO 1/1996 opta por flexibilizar el acogimiento familiar y distingue diferentes modalidades en función de la finalidad del mismo. De manera que se amplían las posibilidades de que el acogimiento familiar cubra las diversas necesidades de los niños. En el art. 173 *bis* del Código Civil se introducen las tres modalidades de acogimiento que se pueden producir: simple, permanente y preadoptivo. El acogimiento simple se refiere a una medida de carácter transitorio que permite a un menor ser recibido en una familia en tanto desaparecen las disfunciones que provocaron la salida de su núcleo familiar de origen. El acogimiento permanente está previsto para las situaciones en las que no es viable la reinserción del menor dentro de su familia de origen ni es posible la adopción. También la ley contempla el acogimiento familiar preadoptivo, para aquellas situaciones en las que el menor va a ser acogido por los futuros adoptantes, permitiendo un periodo de prueba de la adaptación mutua. La LO 1/1996 se constituye junto a las previsiones del

⁷ Artículo 2. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de *Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

Código Civil⁸ en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado.

Sin embargo, transcurridos casi veinte años desde su publicación, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39⁹ de la Constitución y las normas de carácter internacional. En el año 2015 se produce una modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ha configurado el actual régimen jurídico. La reforma está integrada por dos normas, la Ley 26/2015, de 28 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia* y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia* que introduce los cambios necesarios en aquellos ámbitos considerados como materia orgánica, al incidir en los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la Constitución. En concreto haré mención a la Ley 26/2015 por las novedades que introduce en la institución del acogimiento familiar. La ley tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que “permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia” (Preámbulo Ley 26/2015).

La Ley 26/2015 supone un gran avance en la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial que ya había sido regulado con anterioridad en la mencionada LO 1/1996. En el artículo 21 de la Ley 26/2015 recoge la previsión de la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial. Se trata de una disposición ambiciosa cuyo fundamento radica en que el menor necesita un ambiente familiar para un adecuado desarrollo de su personalidad. Este objetivo es común para todos, cuando son menores de seis años, y de forma aún más señalada e imprescindible si son menores de tres años con la principal finalidad de evitar que cualquier menor de tres años ingrese en un centro de protección. El artículo 172.3 del Cc también recoge la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial, puesto que el acogimiento familiar es una medida más beneficiosa que la institucionalización del menor. En la actualidad esta última responde a un modelo especializado en aquellos perfiles de menores que tiene cierta complejidad como adolescentes sin previsión de retorno al hogar familiar, niños con problemas

⁸ El Código Civil en su artículo 172 determina que: “la guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona”.

⁹ La Constitución Española establece en su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

emocionales, de conducta o salud mental y de aquellos que tiene problemas de conductas violentas con sus familias (Carvalho, 2014).

Tras algunas modificaciones en el artículo 173, el artículo 173 *bis* redefine las modalidades de acogimiento familiar en función de su duración. De modo que, se suprime el acogimiento provisional, que ya no será necesario ante la simplificación del acogimiento familiar, así como el acogimiento preadoptivo que actualmente es una fase del procedimiento de adopción. Asimismo, se distinguen el acogimiento de urgencia, temporal y permanente. En primer lugar, el acogimiento familiar de urgencia es una figura novedosa en la Ley 26/2015, principalmente se usa para menores de seis años, pero no exclusivamente, que tendrá una duración no superior a seis meses, mientras se diagnostica la situación familiar o se decide una medida más estable y duradera. El principal objetivo de esta medida es la atención inmediata en tanto en cuanto se decide la medida familiar que le corresponda al menor. Es importante destacar que, frente a la imprevisibilidad del acogimiento, las familias acogedoras han de estar disponibles y ser capaces de responder ante la llegada de un menor a su hogar, para atenderle en sus necesidades (Cuartero, García y Pérez, 2017). Esta tipología de acogimiento, está relacionada con el art. 21 de la Ley 26/2015 que prioriza el acogimiento familiar frente al residencial en aquellos menores que no superen los seis años y para aquellos que sean menores de tres años no se acordará el acogimiento residencial bajo ninguna circunstancia (Mayor, 2017). En segundo lugar, el acogimiento familiar simple que regulaba la anterior legislación (LO 1/1996) fue sustituido a través de la modificación en 2015 por un acogimiento familiar temporal que se adecua mejor al nuevo criterio de clasificación del acogimiento familiar del art. 173 *bis*, basado sobre todo en la duración (Mayor, 2017). “Esta tipología tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reintegración de este en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable como el acogimiento permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la previsible reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva” (Cuartero et al, 2017). La finalidad del acogimiento temporal es dotar de estabilidad al menor hasta que la situación en la que se encuentra se restablezca y pueda reintegrarse en su familia o porque se ha adoptado una medida de carácter estable que previamente no era apropiada (Mayor, 2017). El acogimiento familiar permanente dará lugar al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en caso de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen (Cuartero et al, 2017).

Según la vinculación de los menores con la familia acogedora se puede diferenciar el acogimiento en la propia familia extensa de este, en familia ajena y el acogimiento familiar especializado, como un subtipo de este último, que puede tener o no carácter profesionalizado. El acogimiento en familia extensa es el que incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes del menor, sean consanguíneos o afines (Cuartero et al, 2017).

El objetivo principal de esta tipología es que el niño pueda continuar viviendo en su entorno familiar y social más cercano, con el fin de evitar que el menor entre en un centro (Frigola, 2019). El acogimiento en familia ajena, se trata de una alternativa familiar, fuera de las líneas de parentesco. Ahora bien, no supone una ruptura de vínculos, ni relaciones con la familia de origen, puesto que la medida incluye programas de contacto y visitas con los mismos (Cuartero et al, 2017). Esta opción se contempla cuando no es posible realizarlo en familia extensa porque no está en condiciones de acoger al menor. Estas familias permiten al menor convivir en un ambiente familiar adecuado y acorde a las circunstancias que este presenta (Frigola, 2019). La Ley 26/2015 introduce dos tipologías totalmente novedosas: el acogimiento familiar especializado y el profesionalizado. El primero de ellos se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función con niños de necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello, la correspondiente compensación económica sin suponer en ningún caso, una relación laboral. El acogimiento familiar profesionalizado se lleva a cabo cuando reuniendo los requisitos de cualificación, experiencia y formación específica, exista una relación laboral del acogedor o acogedores con la entidad pública (Cuartero et al, 2017).

La Ley 26/2015 introduce la necesidad de que se valore la adecuación de los acogedores y se definen los criterios¹⁰ de la misma que no estaban hasta ahora recogidos en la normativa estatal. En esta línea destaca el artículo 20.2 que expone que: “el acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento”. Así pues, con la principal finalidad de declarar la idoneidad de las familias, se llevará a cabo una valoración previa realizada por los profesionales del equipo de valoración formado por un/a trabajador/a social y un/a psicólogo/a. No obstante, es preciso mencionar que antes de iniciar la valoración de idoneidad, las familias reciben una formación previa a través de una serie de sesiones llevadas a cabo por los profesionales. El/la pedagogo/a del equipo técnico se encarga de guiar la formación a las familias de acogida, aunque en dicha formación participarán todos los profesionales que formen parte de este en sus respectivas especialidades. Asimismo, el/la trabajador/a social participa en las sesiones donde se hace mención a las compensaciones económicas que recibirán las familias acogedoras (E3). El objetivo de esta formación es dar a conocer a las familias qué es un acogimiento familiar, qué vivencias y qué recorridos han tenido los niños antes de llegar a esa situación y cómo se llevarán a cabo los diferentes procesos del acogimiento (Cuartero et al, 2017).

¹⁰ Los criterios de valoración de idoneidad en Aragón, son regulados en el Decreto 188/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, *por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores*.

2.1.2 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

La comunidad autónoma de Aragón no se ha quedado al margen del reconocimiento jurídico del papel de la infancia, no sólo por sus competencias plenas en materia de protección de menores en situación de desamparo, sino porque gran parte de las actuaciones de los distintos departamentos de la administración de la comunidad autónoma inciden en mayor o menor grado en el bienestar de la infancia. Por ello, se elaboró una ley que respondiese al carácter integral de la promoción y defensa de los derechos de los menores. Con esta consideración integral se elabora y promulga la Ley 12/2001, de 2 de julio, *de la Infancia y la Adolescencia en Aragón* (en adelante Ley 12/2001) para asegurar y promover los derechos de los menores de edad y posibilitar programas de coordinación institucional. La Ley 12/2001 parte de un sistema escalonado de responsabilidad compartida entre los padres de un menor y los poderes públicos, de forma que padres y tutores representan el contexto normal de desarrollo del niño o niña y son el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir sus necesidades. Un segundo nivel, de apoyo inmediato, lo constituye su entorno familiar, mientras que los sistemas públicos de salud, educación, acción social y justicia conformarían un tercer nivel de protección. Finalmente, en caso de que los anteriores niveles no fueran suficientes para garantizar los derechos del menor, actuarían los servicios especializados de protección de menores, todo ello con la garantía y la superior vigilancia del sistema judicial y partiendo de la consideración de los menores como sujetos de derechos y deberes y partícipes fundamentales de su desarrollo (Preámbulo Ley 12/2001). A diferencia de la Ley 26/2015, la Ley 12/2001 sí da una definición concreta del concepto de acogimiento familiar en su Art. 70 que lo define “como una medida de protección que proporciona al menor un núcleo de convivencia familiar, en sustitución o como complemento del propio, bien sea de forma temporal, para su reinserción en su familia de origen o para su adaptación a la familia que lo vaya a adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo requieran”.

A su vez, la comunidad cuenta con dos Decretos que reglamentan el acogimiento familiar. Es preciso mencionar que en Aragón no existe una regulación como tal dedicada especialmente al acogimiento familiar por lo que los profesionales se amparan en legislación vigente que regula la adopción en la comunidad autónoma de Aragón. El primero de ellos es el Decreto 188/2005, de 26 de septiembre, *del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores*. Tiene por objeto regular la actuación de la administración de la comunidad autónoma de Aragón en los procedimientos administrativos previos a la adopción y de acogimiento familiar preadoptivo de menores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2001. Este decreto regula en su Art. 15 los criterios que utilizan los/as trabajadores/as sociales en los procesos de idoneidad de las familias acogedoras, así como todo el procedimiento que se lleva a cabo.

El Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, *por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo*, en el Título I del Reglamento se especifica al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (en adelante IASS), “organismo autónomo adscrito al departamento competente en materia de servicios sociales, como la entidad pública de la comunidad autónoma de Aragón responsable para la declaración de las situaciones de riesgo o de desamparo de los menores y para la concreción de las medidas de protección precisas en cada caso” (Preámbulo Ley 12/2001). En su Título VIII el Decreto regula el acogimiento familiar donde se establecen los principios de actuación que deben adoptar los profesionales en esta materia y en su capítulo tercero se regula el procedimiento de declaración de idoneidad de los acogedores, basado en el procedimiento establecido en el Decreto 188/2005.

La Orden CDS/751/2017, de 29 de mayo, *por la que se regulan las compensaciones económicas para acogimientos familiares de menores en Aragón*, tiene por finalidad atender situaciones de necesidad sobrevenidas en la convivencia familiar, cuando afecte al menor, siendo cubiertas en su totalidad y adecuadamente. Y, por último, la Orden CDS/530/2018, de 23 de marzo, *por la que se convoca el establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación del servicio de Apoyo Integral al Programa de Acogimientos Familiares en familia ajena en sus modalidades de urgente y temporal para menores en desprotección*. En dicha Orden, la figura del acogedor familiar es dotada de un Estatuto de Derechos y Deberes, entre los que incluye el derecho a recibir apoyo técnico y profesional de la entidad pública responsable de los acogimientos familiares. Esta intervención de apoyo deberá consistir en la preparación, seguimiento y apoyo a las familias acogedoras, a los niños y niñas en acogimiento durante todo el proceso que dure el mismo. El Programa de Acogimientos Familiares de Aragón mantiene varias funciones¹¹ técnicas y profesionales directamente atendidas por los equipos técnicos de acogimientos familiares de las direcciones provinciales del IASS.

2.2 EL PROCESO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ARAGÓN

La entrada en vigor de la Ley 26/2015 potenció la protección del menor en el ámbito familiar, esto es, tanto en su familia de origen, como en la familia extensa o ajena a través de la figura del acogimiento familiar. El niño necesita un ambiente familiar adecuado para el pleno desarrollo de su personalidad. La medida de acogimiento familiar conlleva una serie de procesos que requieren de la existencia de familias idóneas y adecuadas, que reciban un soporte y apoyo técnico continuado y que garantice la participación de las mismas. Además, se debe garantizar la participación de los niños acogidos en los procesos de decisión sobre la situación de desprotección que viven como una de las garantías de su interés superior. A su vez, la propia ley introduce como novedad la formalización de la figura del acogedor e introduce “el estatuto del acogedor

¹¹ Dichas funciones comprenden: la captación, acogida, formación inicial, valoración de idoneidad y adecuación, formulación de propuestas de adecuación familia-menor, actualizaciones, renovaciones.

familiar”¹² otorgándoles derechos y deberes propios de cara al menor y a la entidad pública. De este modo con la regulación de los derechos y deberes de los acogedores familiares se establece que tienen derecho a recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo.

2.2.1. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE DESAMPARO

Este procedimiento se inicia a través de una declaración de situación de desamparo cuando un niño tiene necesidades básicas sin satisfacer, que le han provocado o se valora que es probable que le provoquen un daño significativo en su bienestar y desarrollo. La declaración de la situación de desamparo le corresponde, en exclusiva, a la administración competente en materia de protección de menores, atribuida al órgano de la respectiva comunidad autónoma (Moreno, 2012, p 42) que, en este caso, es atribuida al Gobierno de Aragón. Además, en el art. 50 de la Ley 12/2001 se establece que “toda persona, y, en especial, quien por razón de su profesión tenga noticia de una situación de riesgo o desamparo, lo pondrá en conocimiento de la entidad pública competente en materia de protección de menores, garantizándose durante todo el procedimiento la debida reserva y el anonimato”.

De esta manera, cuando se detecte una situación de desamparo se tomarán las medidas oportunas y, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Se pueden dar dos situaciones: por un lado, una situación en la que el contexto familiar permita el mantenimiento del menor en su familia y, por otro lado, la necesidad de que este sea separado de su familia biológica. De modo que, cuando no sea necesaria la salida del menor de su núcleo familiar de origen, los profesionales trabajarán con la familia para solventar los problemas que han derivado en esta situación. El mantenimiento del menor en su familia de origen viene regulado por la Ley 26/2015 que establece como fin superior la continuidad del menor en su familia de origen, salvo excepciones, priorizando medidas familiares duraderas en el tiempo frente a la institucionalización. Cuando las circunstancias atenten contra el interés superior del menor, este será separado de su familia de origen y se dará preferencia, por lo tanto, a las familias de acogida. No obstante, antes de que el menor sea separado de su familia hay que valorar todas las alternativas, priorizando si fuese viable la posibilidad de regularizar un acogimiento con algún familiar cercano (familia extensa). Es preciso mencionar que, en la mayoría de los casos las circunstancias que atraviesan las familias, unida a la dificultad en el mantenimiento del cuidado de los niños provoca que estos sean acogidos en una familia ajena (Frigola, 2019). A diferencia de la modalidad anterior, los acogimientos en familia ajena se realizan con personas que se ofrecen para acoger a un niño que no conocen y con el que no les une ningún tipo de parentesco (Frigola y Solé, 2019, p 135).

¹² Los derechos y deberes de los acogedores aparecen regulados en el artículo 20 bis, de la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Las familias acogedoras, para que puedan iniciar un acogimiento, deben haber recibido la formación previa con anterioridad y, además, tendrán que estar inscritas en la bolsa de familias de acogida (E3). No obstante, este proceso requiere varias fases hasta que una familia es inscrita en dicha bolsa: información previa sobre el programa de acogimiento familiar, formación a las familias acogedoras, valoración de idoneidad a las familias (posteriormente serán inscritas en la bolsa), selección de la familia de acogida, formalización del acogimiento, seguimiento y valoración post-acogimiento. En primer lugar, debe ser la familia la que de manera voluntaria opte por solicitar información para acoger a un menor. Se realiza una sesión de información previa a la formalización de la solicitud de acogimiento, por lo que se lleva a cabo una entrevista de acogida individual familiar para informar sobre el programa de acogimiento (IASS, 2020). Una vez que la familia recibe la información sobre el programa de acogimiento y sigue interesada en seguir adelante se procederá a formalizar la solicitud (E1). Posteriormente, la familia recibirá la formación adecuada que les dote de conocimientos y habilidades necesarias para afrontar las dificultades que puedan surgir en el proceso de acogimiento familiar. Esta formación se considera un derecho de los acogedores que se encuentra regulada en el art. 20 *bis* de la Ley 26/2015 y se concreta en que “tienen derecho a recibir una preparación previa y la obligación de participar en dichas acciones formativas”. Además de esta formación inicial, está previsto que a lo largo de su tarea como acogedores puedan recibir formación continua (Cuartero et al, 2017). Estas sesiones de formación se imparten por el pedagogo del equipo técnico del programa de acogimiento familiar. No obstante, todos los profesionales participan en ellas. Los/as trabajadores/as sociales, en este periodo de formación, son los encargados de explicar las compensaciones económicas que las familias acogedoras recibirán a cambio en función de la modalidad de acogimiento (E3).

2.2.2. FORMACIÓN PREVIA A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

La formación que recibe la familia de acogida antes del proceso de valoración de idoneidad se divide en cuatro sesiones diferentes que son de obligatorio cumplimiento para las familias acogedoras (E2). La primera sesión es una primera toma de contacto, donde se expone el concepto y tipologías de desprotección infantil, se explicará la organización e intervención del Servicio de Protección de Menores y los correspondientes programas de intervención. Se hace mención al marco jurídico de protección al menor con la explicación de los términos: guarda, desamparo y tutela. Posteriormente se hace saber a los participantes la definición propia de acogimiento familiar y las diferentes modalidades. Por último, se pone de manifiesto las funciones de la familia acogedora, su valoración, la declaración de idoneidad, cuáles son los criterios y requisitos para cada acogimiento y las consecuentes fases del procedimiento, así como los derechos y deberes de los acogedores (Cuartero et al, 2017). En relación a la segunda sesión se hace más hincapié a todo lo que tenga relación con las necesidades básicas de la infancia, las necesidades específicas de los menores susceptibles de

acogimiento familiar. Así como las consecuencias, dificultades que puede presentar el acogimiento y las herramientas personales y técnicas educativas para poder llevarlas a cabo una vez aprobada la valoración, y por último las exigencias personales de las familias de acogida. La tercera sesión hace referencia a temas de apego y la resiliencia, con especial mención a los sentimientos y dudas ante la separación. Se tiene en cuenta además las diferentes fases que se pueden encontrar en la adaptación de los menores acogidos (Cuartero et al, 2017). Y, por último, en la última sesión se explica el procedimiento de las visitas, el trabajo de historia de vida, haciendo hincapié en la finalización y la despedida de los acogimientos para que las familias de acogida sean conscientes del momento que tendrán que pasar, la importancia de la privacidad y la confidencialidad en el acogimiento familiar. Para finalizar se explica la comprensión del acogimiento y en consecuencia el seguimiento que se llevará a cabo (Cuartero et al, 2017).

2.2.3. VALORACIÓN DE IDONEIDAD A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS

Una vez que la familia ha recibido la información adecuada y la formación correspondiente en las cuatro sesiones anteriores se procede a realizar la valoración de idoneidad de estas. Esta valoración se lleva a cabo por un/una trabajador/trabajadora social y un/una psicólogo/psicóloga. En esta parte del proceso el equipo de valoración elabora un informe psicosocial donde se especifica la situación de la familia. Este informe se compone de una parte psicológica y una social, esta última es elaborada por el/la trabajador/a social del equipo técnico. El informe social elaborado por los profesionales está compuesto por diferentes áreas de estudio. El informe debe recoger los siguientes contenidos: datos de identificación de los evaluados, la metodología utilizada en el informe y la situación sociofamiliar (E3). Los profesionales deben valorar diferentes aspectos del contexto familiar entre los que se encuentran: la composición del núcleo familiar, la relación de la pareja (evaluado por el/la psicólogo/a), dinámica social (evaluado por el/a trabajador/a social historia familiar) y la relación previa con el menor (en caso de familia extensa). Además, se tienen en cuenta aspectos como la situación económica-laboral, la vivienda, situación sanitaria, ocio y tiempo libre de la familia. Por otro lado, los profesionales deben valorar la actitud y motivación del acogimiento (cómo surge la idea, si se trata de un proyecto compartido o no, implicación y compromiso, actitud hacia el menor acogido y conocimiento de las circunstancias del mismo...). Y, por último, se deben evaluar las competencias educativas que presenta la familia (tipo de apego, capacidad para dar cobertura a las necesidades emocionales del menor...) y las características de personalidad (perfil de personalidad de los evaluados, habilidades de cuidado...) (Dirección General, 2019).

Una vez valorada la idoneidad para el acogimiento, esto es, si sus circunstancias sociales, personales y familiares son compatibles con la realización de acogimiento familiar de un menor, se lleva a cabo el trámite de audiencia por el que los interesados son informados del resultado de la valoración, con carácter previo a que se emita la

Resolución de idoneidad para el Acogimiento Familiar, del Director Gerente del IASS. Si la valoración ha sido idónea la familia pasará a formar parte de la bolsa de familias acogedoras de Aragón y si por el contrario la valoración ha sido negativa se inicia un plazo de 10 días para que la familia presente alegaciones (IASS, 2020).

2.2.4. SELECCIÓN DE LA FAMILIA DE ACOGIDA

Cuando se han realizado las fases de formación y valoración de idoneidad la familia podrá comenzar un proceso de acogimiento cuando se den las circunstancias para ello. En el momento que un menor ha sido separado de su núcleo familiar, comienza un proceso de selección de la familia de acogida adecuada acorde a las circunstancias del menor. Para ello se valorarán las necesidades, características y circunstancias del niño propuesto para el acogimiento familiar. Se evalúa qué familia de entre las disponibles en la bolsa puede atender la demanda planteada de acuerdo a su ofrecimiento. Esta valoración de idoneidad de la familia acogedora “se realiza para conservar el interés superior del menor con el fin de que su vida se desarrolle en un entorno familiar adecuado, libre de violencia y le permita un desarrollo pleno de su personalidad” (IASS, 2020).

2.2.5. FORMALIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO

Cuando la familia ha sido seleccionada en función de las necesidades del menor se formalizará el acogimiento mediante unos acuerdos donde se establecen los compromisos, deberes y derechos entre las partes, familia, menor y Director/Directora Provincial del IASS. Una vez que se ha aprobado el acogimiento, los profesionales, en este caso el/la trabajador/a social, realizan un informe que posteriormente se notifica al Consejo Aragonés de Adopción¹³, ya que todos los acogimientos que se llevan a cabo deben ser aprobados por él. El acogimiento de urgencia es una excepción ya que debido a la situación de gravedad que se establece en él, el informe se notifica al Consejo con un mero fin informativo (E3). Por el contrario, el acogimiento temporal y permanente deben ser aprobados para que puedan seguir adelante (E3).

Una vez que han sido aprobados los acogimientos se puede seguir con el proceso, se formaliza el acogimiento y el menor pasa a formar parte de la familia de acogida. Es preciso mencionar que, del mismo modo que los acogedores gozan de derechos¹⁴ estos

¹³ El Consejo Aragonés de Adopción, es un órgano colegiado adscrito al Instituto Aragonés de Servicios sociales y cuyo Reglamento de funcionamiento está regulado por el Decreto 67/2003 de 8 de abril del Gobierno de Aragón y, entre sus funciones se encuentra formular la propuesta en el procedimiento previo a la adopción de menores.

¹⁴ Los principales derechos de las familias acogedoras son entre otros: “recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo”. “Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los

también deben cumplir con una serie de deberes hacia los menores acogidos. Los acogedores familiares deberán velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurar una formación integral en un entorno afectivo. Así como asegurar la plena participación del menor en la vida de la familia y respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiar del menor acogido. A su vez, los menores también gozan de derechos. En especial, se hace referencia a que los niños y niñas deben: “ser oídos conforme dispone la ley, y en su caso, ser parte en el proceso de oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable y en función de su edad y madurez”. El menor también tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. Asimismo, el niño tiene derecho a: “relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas” (IASS, 2020).

2.2.6. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL MENOR EN LA FAMILIA DE ACOGIDA

Asimismo, una vez formalizado el acogimiento y explicados los derechos y deberes de los acogedores se procederá a realizar el seguimiento y acompañamiento con las familias tanto de origen como de acogida. El seguimiento es el proceso de acompañamiento técnico por los profesionales del IASS sobre la evolución del menor en la familia. En concreto son los educadores sociales y pedagogos los que llevan a cabo esta función (E2). “Sobre todo, se trata de proporcionar apoyo, pero también, de recibir la información que proporcione la familia sobre el menor que en todo caso, será tomada en cuenta en las decisiones que se tomen y que afecten al mismo” (IASS, 2020). A pesar de que el/la trabajador/a social no lleva a cabo el seguimiento de la evolución del menor en la familia de acogida, más adelante se desarrollará esta fase con más detenimiento puesto que puede intervenir en según qué circunstancias.

2.2.7. VALORACIÓN POST-ACOGIMIENTO

Tras el cese del acogimiento, se realiza una valoración post-acogimiento¹⁵ llevada a cabo por el/la trabajador/a social del equipo técnico. Posteriormente, el informe que se ha realizado por los profesionales se notifica al Consejo que debe aceptarlo. Una vez que el informe se acepta, el menor puede abandonar la familia de acogida para regresar con su familia biológica. No obstante, el regreso del menor a su familia de origen no es el único motivo por el que puede darse el cese del acogimiento. Entre estos motivos se encuentran: cumplimiento del plazo fijado en la modalidad del acogimiento familiar,

procesos de oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada”.

¹⁵ Es preciso mencionar que, debido a que esta valoración forma parte de una de las funciones del/la trabajador/a social se desarrollará en profundidad más adelante en el correspondiente epígrafe.

emancipación o mayoría de edad del menor, sin perjuicio de la convivencia posterior voluntaria. A su vez, también puede darse por decisión judicial, de la administración o de los propios acogedores. La valoración post-acogimiento supone a grandes rasgos escuchar a la familia acogedora y valorar su continuidad o no en la bolsa de acogida. Se debe valorar si se encuentra a disposición de volver a realizar un nuevo acogimiento o, por el contrario, debe guardar un periodo de tiempo de descanso debido a todo lo que supone un nuevo proceso de acogimiento de un menor.

En la siguiente tabla que se expone a continuación, quedan resumidas las tres fases del procedimiento a seguir en un acogimiento familiar en la comunidad autónoma de Aragón:

PRIMERA FASE	SEGUNDA FASE	TERCERA FASE
Formación de las personas que se ofrecen para llevar a cabo acogimientos familiares como medida protectora que conformará la bolsa de familias.	Valoración de la adecuación del acogedor o acogedores concretos como medida protectora para atender a necesidades específicas de un menor.	Acoplamiento y seguimiento del acogimiento familiar.

Fuente: Elaboración propia a través de la Regulación normativa del Acogimiento Familiar del IASS.

3. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS

La intervención familiar ha formado parte del trabajo social desde sus orígenes. Un texto de referencia de Mary Richmond (1995), pionera del trabajo social en Estados Unidos, ya defendía, a principios del siglo XX, la necesidad de tener en cuenta los núcleos familiares de los individuos a la hora de llevar a cabo cualquier acción social, ya que no se puede aislar a las personas de sus historias familiares (en Solé, 2019). La intervención con las familias desde el trabajo social se ha fundamentado siempre en su consideración como una totalidad y no únicamente como un sumatorio de personas individuales, partiendo de una consideración grupal de la familia de manera que sus miembros se influyen entre ellos y las diversas redes sociales de las cuales forman parte (Fernández, 2018). Autores importantes del modelo llamado psicosocial (Perlman, 1957; Towle, 1965; Hollis, 1972; y Turner, 1996) identifican el trabajo social con las familias como uno de los elementos principales a los que se dirige la acción profesional, con objetivos de cambio personal.

La familia se entiende como un grupo social primario, que cumple funciones esenciales para los individuos como la socialización de sus miembros y la cobertura de sus necesidades básicas (Escartín, 1992). Destaca el papel que tiene en relación con el

cuidado de los/las hijos/as (Del Fresno, 2011) y la consideración como agente primario de socialización, con un rol muy destacado en la educación de sus miembros y en la transmisión de pautas culturales (Merton, 1970). Se trata de la base de la organización social y es sensible a los cambios políticos, económicos y sociales. Debido a los cambios que afectan al núcleo familiar, no se puede hablar de un modelo de familia, sino de diferentes modelos que se crean y recrean en función del contexto sociocultural, las posibilidades socioeconómicas, demográficas y las opciones personales e ideológicas (Roigé, 2006). Por lo que existen diversas formas de hacer familia como, por ejemplo: la monoparentalidad, recomposición familiar, la homoparentalidad, la adopción... (Konvalinka, 2012). En la complejidad de estos escenarios familiares es donde el/la trabajador/a social inicia la atención al individuo y a su familia. El profesional debe comprender y valorar la individualidad y su situación particular de una visión globalizadora.

En su intervención, los y las trabajadores/as sociales abordan las problemáticas familiares con métodos y modelos diversos. Entre los métodos utilizados por los trabajadores sociales en sus intervenciones acostumbran a tener una orientación individual-familiar, grupal y comunitaria. El método del trabajo social individual-familiar centra su intervención en el desarrollo de una relación de ayuda con otro individuo en problemas, en la que ambas partes asumen ciertos acuerdos que les permiten alcanzar la solución escogida. El trabajo social con grupos apunta al trabajo grupal con individuos en torno a procesos de prevención y rehabilitación social, en el que el proceso grupal ayuda a mejorar la interacción de individuos, grupos y sistemas sociales para el beneficio mutuo (De la Paz y Saldías, 1998, p 12) Y, por último, el trabajo social con comunidades es un método de acción social que pretende a través de la organización de la comunidad involucrada, la resolución de sus problemas (De la Paz et al, 1998).

Además de la utilización de los tres métodos, el trabajo social se ha nutrido de teorías y modelos que son referentes en el abordaje de problemáticas sociales. Entre los modelos¹⁶ en los que se basa en la práctica el trabajo social se encuentra: el psicodinámico, intervención en crisis, centrado en la tarea, modificación de la conducta, el de resolución de problemas y el sistémico. Entre ellos el modelo más utilizado en los

¹⁶ Entre los modelos de intervención citados con anterioridad se encuentra en primer lugar, el modelo psicodinámico que estudia más allá del puro comportamiento externo del sujeto y tiene un enfoque hacia el inconsciente, determina siempre que los comportamientos son motivados por fuerzas y siempre por conflictos internos. En segundo lugar, el modelo de intervención en crisis desarrollado por la psiquiatría americana. La adaptación al trabajo social se debe a que en la práctica el profesional está en permanente contacto con personas en situaciones de crisis (Viscarret, 2007). En tercer lugar, el modelo centrado en la tarea es un modelo orientado a proporcionar una respuesta práctica breve y eficaz centrándose en la consecución de unos objetivos específicos. A su vez, destaca el modelo conductual o de modificación de la conducta, derivado de la psicología conductista y, posteriormente de teorías cognitivo-conductuales (Viscarret, 2007). Y, por último, el modelo de resolución de problemas enfocado a ayudar a las personas a enfrentar y resolver sus problemas proporcionándoles herramientas para que asuman más protagonismo en la solución de sus problemas (Perlman, 1957).

procesos de intervención familiar y en aquellas situaciones familiares conflictivas los profesionales hacen uso del modelo sistémico. Este modelo centrado fundamentalmente en la teoría general de sistemas se basa en afrontar los problemas de las personas, considerando que estas se encuentran vinculadas a otros elementos con los que interactúan sistemáticamente. De modo que, se establece una relación entre la conducta del sujeto y los diferentes sistemas en los que se encuentra (Martínez, 2005). El interés central del modelo sistémico es abordar los problemas de interacción que pueden surgir en el sistema familiar. Por ello Viscarret (2007) establece que la teoría de sistemas pone el énfasis en las interacciones puesto que es un elemento central para entender las dinámicas familiares que se originan. De manera que se da especial importancia desde el trabajo social a los comportamientos, los acontecimientos, los hechos y los procesos sociales que no pueden ser entendidos de forma aislada, sino que han de ser vistos desde la interacción.

El/la trabajador/a social debe adaptarse a las peculiaridades de cada intervención ya que cada familia es diferente, aunque compartan el mismo problema (Fernández y Ponce, 2011). Es por ello que, el trabajo con familias en general, demanda al profesional la capacidad de asumir distintos roles, por la diversidad y complejidad de las problemáticas familiares. Los diferentes roles que el profesional puede asumir son informativo, asistencial, de asesoramiento, de control y evolutivo. El/la trabajador/a social se puede enfrentar al trabajo con familias desde distintos contextos por lo que la situación influye en el momento de determinar qué rol asume el profesional. La intervención del/la trabajador/a social aparece en contextos de vulnerabilidad de la familia que se encuentra inmersa en condiciones de pobreza. Los hogares vulnerables suelen encontrarse con mayores probabilidades de deterioro, pérdida o imposibilidad de acceso a condiciones dignas de viviendas, salud, educación, trabajo, participación en la vida política y social y en el acceso a la información y a las oportunidades (Fernández et al, 2011). En estas situaciones la función principal del profesional es proporcionar a la familia los recursos necesarios para superar dicha situación (orientación e información sobre ayudas económicas, herramientas educativas...).

La figura del trabajador social también actúa en contextos más conflictivos donde la vulnerabilidad de la familia ha seguido avanzando y ha desencadenado en situaciones de riesgo para el menor. Se considera situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares, o por influencia del entorno, se ve perjudicado el desarrollo personal o social del menor (Moreno, 2012). De forma que, sin alcanzar la intensidad o persistencia que fundamentaría la declaración de desamparo, se precisa la intervención de la administración pública. Las situaciones de riesgo se caracterizan por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar (Allueva, 2011). Por ello los profesionales garantizarán su protección y aportarán a la familia las herramientas necesarias para conseguir superar la situación de dificultad que están atravesando. Si la situación de

riesgo se agrava puede llegar a desencadenar en una situación de desamparo¹⁷ (Frigola, 2019). Estas situaciones se producen a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material (Moreno, 2012).

En estas situaciones más complejas la intervención de los profesionales no solo trata de eliminar la situación de riesgo o ciertas pautas disfuncionales, sino de mejorar las competencias de la familia para que puedan aportar al menor un entorno apropiado. De modo que, las funciones que cumplen los/as trabajadores/as sociales en las situaciones más conflictivas con menores y familias son: asistencial, preventiva, investigación, rehabilitación, coordinación y promoción del bienestar social del menor. En primer lugar, la función asistencial requiere atención directa y tratamiento de la problemática que presente el menor y su familia cuando tienen poca capacidad para resolver los problemas. Proporcionando la información orientación y asesoramiento ante la demanda planteada. En segundo lugar, la función preventiva consiste en la detección de posibles situaciones problemáticas y de alto riesgo social para el menor. A su vez, el profesional debe trabajar con la familia y con el menor mientras sea posible, tratando las deficiencias actuales y previniendo el deterioro (Mondragón y Trigueros, 1993, pp 77-80). En tercer lugar, la función de investigación requiere el conocimiento y detección de las situaciones de necesidad y riesgo para los menores y sus familias. Asimismo, se debe hacer efectivo el registro de los casos de solicitud de ayuda o información que preste a los niños y familias. En cuarto lugar, la función de rehabilitación requiere la búsqueda de elementos que permitan la rehabilitación y la corrección de las personas que se encuentren en situaciones conflictivas para conseguir su ajuste al medio social. Asimismo, los profesionales deben realizar el seguimiento de aquellos casos que lleguen al servicio para ver la evolución de los problemas del menor. Además, deben proporcionar la información, orientación y asesoramiento a las familias de los menores sobre los problemas que se estén tratando. La función de coordinación consiste en mantener contacto con los profesionales que trabajan en el mismo servicio a través de reuniones y trabajo en equipo para poder derivar y canalizar diferentes casos a otros profesionales del sector. De modo que, la coordinación con diferentes profesionales aportará diversas posibilidades de solucionar los conflictos. Y, por último, la función de promoción del bienestar social del menor donde se llevan a cabo actuación de promoción y desarrollo de la ayuda mutua y actividades voluntarias para promocionar el bienestar del menor: acogimientos familiares. A su vez, los profesionales cumplen una función de concienciación y estímulo a las familias para que participen activa y responsablemente en su propio desarrollo y para mejorar las condiciones sociales (Mondragón y Trigueros, 1993, p 80).

¹⁷ Artículo 28 del DECRETO 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo.

Así pues, el trabajo social se ha configurado como una de las profesiones fundamentales en el trabajo con la infancia y la familia tanto en contextos de vulnerabilidad como en aquellas situaciones más conflictivas. Las situaciones donde intervienen los/as trabajadores/as sociales son diversas dependiendo de la gravedad de la situación. Pero por el contenido que abarca el presente trabajo, se hace especial mención a aquellas situaciones de desamparo donde es necesaria la retirada del menor de su núcleo familiar, asumiendo su tutela la administración pública y poniendo en marcha las medidas de protección precisas. Todas las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales se regirán por el interés superior del menor, que a raíz de la legislación vigente de la protección del mismo se ha convertido en un criterio para decidir qué medidas son las más apropiadas para él y para la preservación del propio interés.

3.1.1 LA PRIORIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DEL ENTORNO FAMILIAR

La consideración jurídica del menor ha variado a lo largo del tiempo y ha pasado de ser un sujeto sometido a la patria potestad y, por tanto, carente de poder de decisión, a ser un sujeto con un mayor protagonismo que debe ser escuchado y consultado en las actuaciones que tengan relevancia en su vida (Verdera, 2017, p 519). Los niños y adolescentes tienen hoy en día la consideración de sujetos activos de derechos, de protagonistas principales de su propia historia. Los/as niños/as son personas y se deben considerar sujetos de derechos específicos atendiendo a su condición infantil. Esta preocupación por la infancia aparece en declaraciones y convenios internacionales desde principios del siglo XX, pero hasta 1989 no se dio el salto cualitativo que implica aprobar un texto normativo de vocación universal. Dicho texto es la CDN que considera al niño como un sujeto de derecho a quien se reconocen, no solo derechos de protección y promoción, sino también de participación. En esta línea, destaca el artículo 3 de la CDN que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. Además, esa disposición se establece como uno de los valores fundamentales de la Convención y, de especial importancia en materia de protección de menores.

El objetivo del concepto de interés superior del menor es garantizar que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos sea el interés superior del niño. Eso significa que toda medida que se adopte en nombre del menor tiene que respetar el interés superior del mismo. Este principio está formado por tres dimensiones (como derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo y norma de procedimiento). En primer lugar, como derecho sustantivo hace referencia a que el niño tiene derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta cuando se tome una decisión importante para él. En segundo lugar, es considerado un principio jurídico interpretativo fundamental. De manera que, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación

que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y, por último, se considera una norma de procedimiento que determina que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) en el menor (Observación General nº 14).

El interés superior del niño es de importancia fundamental, como también lo son las opiniones del mismo puesto que para decidir qué es el interés superior del menor es preciso escucharle y tener en cuenta su opinión. Así pues, el artículo 12¹⁸ de la CDN establece el derecho de cada niño a “expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño”. Recae así sobre los estados partes la obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente¹⁹ (Observación General nº 12). Se trata de una de las aportaciones más relevantes al derecho internacional de los derechos humanos y la concepción del menor como sujeto de derechos. Todo ello supuso una transformación del enfoque tradicional, que atribuye a los niños el papel de receptores pasivos de los cuidados y atenciones de los adultos para reconocerlos como protagonistas activos y, por tanto, llamados a participar en todo proceso que les concierne. El niño pasa a ser contemplado como un individuo con opiniones propias que habrán de ser atendidas en consonancia con su capacidad y madurez (Becerril, 2014, p 13).

El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención configurándose como uno de los cuatro principios generales junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño. Este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos (Observación General nº 12). El artículo 12, como principio general, está vinculado a los demás principios generales de la Convención, y, en particular, es interdependiente con el artículo 3 (consideración primordial del interés superior del niño). En realidad, no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial

¹⁸ El artículo 12 de la CDN establece que:

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

¹⁹ Artículo 15 de la Observación General número 12.

de los niños en todas las decisiones que afecten a su vida (Observación General nº 12, p 215).

De este modo, la Convención marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que este desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo. Como resultado de la regulación del interés del menor, este debe ser el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección del mismo. Por lo tanto, haciendo referencia a las medidas de protección de menores se plantea su protección como la base y motor de todo acogimiento. Aquellas medidas que deben adoptarse respecto al menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectual e integración social del menor (Moreno, 2012, p 26). Así pues, este principio se convierte en un criterio para decidir qué medidas tomar cuando el menor se encuentra en una situación de desamparo. Como se ha comentado con anterioridad el interés superior del menor se compone por tres dimensiones diferentes con el fin principal de asegurar el respeto completo y garantizar todos los derechos del menor, así como su protección integral. Por lo que debido a la importancia que este principio tiene en todos los procesos de protección al menor y, en especial, en el acogimiento familiar, los profesionales son conscientes de que toda actuación que lleve a cabo debe estar regida por el interés superior del propio menor.

En esta línea, la CDN establece que el interés superior del menor se concreta en la permanencia del menor en su entorno familiar siempre y cuando la familia cumpla las condiciones para garantizar la protección del menor. Por lo que, los profesionales del ámbito de protección de menores y en concreto, los/as trabajadores sociales tienen un papel muy importante en detectar cuando el menor debe permanecer o no en su núcleo familiar. Así pues, los profesionales deben llevar a cabo una evaluación y determinación del interés superior del menor en el contexto de una posible separación del niño y sus padres puesto que, la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños²⁰. Prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar son elementos importantes del régimen de protección del niño, y se basan en el derecho recogido en el artículo 9, que exige “que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando tal separación es necesaria en el interés superior del niño”. De modo que, en este proceso de decisión los profesionales deben tener en cuenta una serie de elementos para la evaluación y determinación del interés. Además, es preciso destacar que no siempre coinciden los deseos de los menores con la medida de protección adecuada que se toma puesto que, a pesar de tener en cuenta el derecho a ser escuchado y, por lo tanto, sus deseos, siempre se deberá responder a su interés superior. Por lo que los profesionales deben hacer comprender al menor las decisiones adoptadas en torno a la medida de

²⁰ El derecho del niño a la vida familiar está protegido por la Convención en el art 16: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.

protección más apropiada para él ya que, aunque prevalezca la permanencia del menor en su familia en ocasiones no se puede llevar a cabo y es necesaria la separación.

En esta línea, debido a todo lo que supone la separación del niño de su familia de origen es importante hacer una evaluación del interés superior del niño. Se trata de una actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño en general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del menor de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual. Además, se deberá tener en cuenta el contexto social y cultural del menor, como, por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia biológica, la familia ampliada o los cuidadores. Es preciso mencionar que los elementos de la evaluación del interés superior pueden entrar en conflicto cuando se estudia un caso concreto y sus circunstancias. Por ejemplo, la preservación del entorno familiar puede chocar con la necesidad de proteger al niño contra el riesgo de violencia o malos tratos por parte de los padres. En esas situaciones, se tendrán que ponderar los elementos entre sí para determinar la solución que atienda mejor al interés superior del niño (Observación General nº 14, p 275). De esta manera, al ponderar los diferentes elementos, los profesionales deben tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención. Puede haber situaciones en las que factores de protección que afectan al niño (que pueden implicar, por ejemplo, limitaciones o restricciones de derechos) hayan de valorarse en relación con medidas de empoderamiento (que implican el ejercicio pleno de los derechos sin restricciones). En esas situaciones, la edad y madurez del niño deben guiar la ponderación de los elementos. Debe tenerse en cuenta el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social del niño para evaluar su nivel de madurez (Observación General nº 14).

Debido a todo lo que supone para el menor la separación de sus padres, los profesionales deben evaluar el contexto familiar y dicha medida solo debería aplicarse como último recurso. La separación no debería llevarse a cabo si se puede proteger al niño de un modo que afecte menos a la familia. Antes de recurrir a la separación, los profesionales deben proporcionar apoyo a los padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales y restablecer o aumentar la capacidad de la familia para cuidar del menor, a menos que los profesionales decidan la separación sea necesaria para proteger al menor. Los motivos económicos no pueden ser una justificación para separar al niño de sus padres, así pues, los/as trabajadores/as sociales deben proporcionar a la familia la información y orientación necesaria para garantizar mínimos de subsistencia.

Lamentablemente, no siempre se puede hacer efectiva la permanencia del menor en su núcleo familiar y es necesaria la salida del menor de su familia biológica. No obstante, la LO 1/1996 reconoce que la protección del interés superior no está reñida con la posibilidad del retorno del menor a su familia de origen cuando las circunstancias de cada caso concreto lo permitan (Moreno, 2012). El principio de reinserción²¹ en la propia familia, junto con el interés superior del menor, se encuentra regulado en el art. 172.4 Cc que parte de la consideración de que el bienestar del menor se asegura mejor sin separarlo de su entorno familiar. Para acordar el retorno del menor a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres por parte de los profesionales ni propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y/o materno, sino que es necesario que esta evolución, en plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que pueden haber determinado la situación de desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor (Moreno, 2012, p 27). El retorno al núcleo de la familia biológica sería lo deseable, pero, en muchos casos ese regreso no se puede llevar a cabo porque los padres han demostrado no ser aptos para el cumplimiento de las funciones inherentes a la patria potestad (Moreno, 2012, p 23). Así pues, cuando el contexto familiar no permite mantener al niño en su entorno social y familiar o no es posible su reinserción en él, se facilitará al menor una familia de acogida con el fin de que se desarrolle en un entorno familiar apropiado.

3.3 LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

El /la trabajador/a social es un profesional de la acción social que tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para: intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven individuos, familias, grupos y comunidades, asistiendo y manejando conflictos. A su vez, el profesional contribuye a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de los derechos sociales (Libro Blanco de Trabajo Social, 2004, p 113). Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales de la acción social a: la integración social de personas, familias, grupos y comunidades, la constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. Los profesionales intervienen con personas, familias, grupos, y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos. A su vez,

²¹ El principio de reinserción del menor en la familia está proclamado en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España el día 30 de noviembre de 1990 donde en su artículo 9 establece que: “los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.

los/as trabajadores/as sociales desarrollan sus funciones en diferentes ámbitos (servicios sociales, salud, educación, justicia, vivienda y tercer sector) (Libro Blanco de Trabajo Social, 2004).

Los servicios de atención a infancia y familia son servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la familia (Libro Blanco de Trabajo Social, 2004). Entre los servicios de atención a la infancia y familia, se hace mención especial al acogimiento familiar que se constituye como la medida de protección por excelencia, siendo la preferida por el ordenamiento jurídico sobre el residencial. Los profesionales cumplen una gran labor en los procesos de acogimiento familiar puesto que son los que acompañan al menor cuando es separado de sus padres, proporcionándole la información adecuada sobre la situación en función de su edad y madurez.

El/a trabajador/a social junto a los diferentes profesionales que actúan en los procesos de acogimiento familiar se encargan de realizar las funciones de información, formación, valoración de idoneidad, asignación de familias y seguimiento de los procesos de acogimiento²². Para garantizar al menor el entorno más acorde a sus circunstancias los/as trabajadores/as sociales cumplen una labor muy importante en el proceso valorando a las familias acogedoras (E2). Esta valoración que realizan los/as trabajadores/as sociales es clave a la hora de preservar el interés superior del menor puesto que, los profesionales evalúan la capacidad de la familia acogedora para que responda a las necesidades del niño (E3). De modo que, la función integral que caracteriza la intervención del trabajador social es la articulación del proceso, es decir, se trata de una actuación que estudia y valora la estructura sociofamiliar de las personas en proceso de ser acogedoras. Sin embargo, no es esta la única función que cumple el/la trabajador/a social a lo largo del proceso del acogimiento familiar (IASS, 2020). El/la trabajador/a social también realiza las funciones de: información y formación a las familias acogedoras, mantenimiento de las bolsas de acogida y difusión de las campañas de sensibilización, así como la adaptación del menor a su familia de acogida y la valoración post-acogimiento de la misma.

Considero importante destacar, que dependiendo de la legislación que regula las medidas de protección en cada comunidad autónoma, las funciones que adquieren los profesionales del sector es diferente. De modo que, desarrollaré las funciones de los profesionales en el ámbito del acogimiento familiar y, en especial, de los/as trabajadores/as sociales en la comunidad autónoma de Aragón. El sistema de protección de menores en Aragón está constituido por diferentes profesionales que comparten una metodología de coordinación y colaboración interdisciplinar. Sin embargo, me centraré exclusivamente en comentar las funciones que realizan los/as trabajadores/as sociales en el Equipo de Acogimiento de la Dirección Provincial del IASS en la provincia de

²² Todas estas funciones citadas anteriormente forman parte de los derechos de los acogedores (Art. 20 bis Ley 26/2015).

Zaragoza. Cabe mencionar que el proceso que se lleva a cabo para la formalización de un acogimiento familiar se enmarca dentro del Programa de Acogimiento Familiar que pertenece al IASS integrado por un equipo técnico multidisciplinar (dos educadores/as sociales, un/a psicólogo/a, un/na pedagogo/a y un/a trabajador/a social) (E1).

3.3.1 LA FUNCIÓN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

Desde el momento en el que una familia se pone en contacto con la entidad pública a través de un número de teléfono y/o un correo electrónico aparece la figura del trabajador social. En esta primera fase se recogen los datos de contacto de la familia para concertar una sesión de información a modo general sobre el programa de acogimiento (E2). La principal dificultad que establece la trabajadora social del IASS en esta fase inicial donde se transmite la información sobre el proceso a la familia es que estas deben ser conscientes de lo que supone un acogimiento. Los profesionales saben que existe cierto desconocimiento sobre la institución y ellos son los que deben aportar toda la información. Las familias no son conscientes de todo lo que supone este proceso. El menor es retirado de su familia biológica y debe aprender a convivir con otra familia que, en su mayoría, es desconocida para él. El proceso de acogimiento consiste, y así debe ser explicado por los profesionales, en cuidar y sanar a un menor que se encuentra en una situación de desprotección por parte de su familia (E3). Una vez explicado todo ello a las familias se llevan a cabo las sesiones de formación que se realizan a las familias de acogida una vez que ya han formalizado la presentación de solicitud. La función que cumple el/la trabajador/a social en esta fase es la de explicar las diferentes compensaciones económicas²³ que reciben las familias (E3). En dicha sesión el/la trabajador/a social expone las diferentes cuantías que las familias de acogida recibirán en el momento que se encuentren en un proceso de acogimiento de un menor. El profesional hace especial mención a las diferencias en las cuantías²⁴ dependiendo del tipo de acogimiento, ya que si se trata de uno urgente la cuantía es mayor, mientras que si se trata de uno temporal o permanente esta disminuye. Esto puede condicionar a las familias y siempre deben estar informadas (E3). Así como de los diferentes complementos que se pueden recibir dependiendo de si el menor sufre algún tipo de

²³ Las compensaciones económicas que reciben las familias de acogida en Aragón están reguladas en la ORDEN CDS/751/2017, de 29 de mayo, por la que se regula las compensaciones económicas para los acogimientos familiares de menores de Aragón.

²⁴ Las diferentes cuantías según el tipo de acogimiento son: acogimiento temporal y permanente: 11,66 €/día y acogimiento de urgencia: 23,32 €/día. En relación a los complementos se hace la siguiente distinción: atendiendo a la discapacidad: si la discapacidad se encuentra entre 33% a 65%: 15,39 €/día y si es mayor de 65%: 17,37 €/día. En cuanto a las necesidades del menor: desplazamientos la cuantía será mayor cuanto más km se recorran (entre 50 a 200 euros al mes); apoyo extraescolar en función del importe del gasto y previa presentación de la factura. Otros apoyos (fisioterapia, atención terapéutica, atención temprana, logopedia, prótesis ópticas y ortodoncias). Y una compensación para acogimientos especializados de carácter temporal o permanente 40€/ día. Dicha compensación es incompatible con la percepción de los complementos anteriores.

discapacidad o para la atención a necesidades del menor (atención temprana, psicólogo, fisioterapia, logopedia...).

Se considera un problema, bajo mi punto de vista, que los/as trabajadores/as sociales no intervengan más en los procesos formativos ya que, están lo suficientemente formados para tal labor y permitiría dar mayor protagonismo a esta figura. De esta manera, se permitiría que las familias conozcan a los profesionales implicados en todo el proceso generando una relación de trabajo más cercana, así como, construir un clima de confianza que pueda ayudarles a conocer mejor la figura del trabajador social.

3.3.2 LA FUNCIÓN DE VALORACIÓN DE IDONEIDAD A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

Una vez que la familia ha recibido las sesiones de formación correspondientes se procede a realizar la valoración de idoneidad y del ofrecimiento de la familia (IASS, 2020). Esta valoración se lleva a cabo por un/a trabajador/a social y un/a psicólogo/a que se completa además con una visita al domicilio familiar que se ofrece para el acogimiento (IASS, 2020). El principal objetivo que tiene este proceso es “evaluar la capacidad de las personas y familias que se ofrecen al acogimiento para garantizar la cobertura de las necesidades asistenciales, educativas y emocionales de las personas acogidas, promoviendo su participación plena en la vida familiar y social, respetando su identidad familiar, proporcionándoles un entorno estimulante y ofreciéndoles una base de apego seguro” (Dirección General, 2019). El papel que cumple el/la trabajador/a social en la valoración de idoneidad es crucial para la preservación del interés superior del menor con el fin de que este se desarrolle en un entorno adecuado y se garantice el pleno desarrollo de su personalidad. Es preciso mencionar que el proceso de valoración de idoneidad a las familias acogedoras se lleva a cabo tanto si es familia extensa como si se trata de familia ajena. Las funciones principales que cumplen los/as trabajadores/as sociales junto con los/as psicólogos/as son estudiar y valorar la idoneidad de los solicitantes, emitiendo informes relativos a la valoración personal, social y psicológica de los solicitantes y, en su caso, las características de los niños que podrían acoger (E3).

En esta fase tan importante para el proceso de acogimiento los profesionales encuentran grandes dificultades para valorar a la familia puesto que tienen que aportar al niño las necesidades y cariño que requiere. De manera que, la actitud de los profesionales debe ser comprensiva y respetuosa, estimulando la reflexión, para que la familia valorada colabore facilitando el conocimiento de sus vidas para que la familia pueda responder mejor a las necesidades del menor puesto que, la función primordial de la valoración es procurar el bienestar emocional y físico del menor que va a ser acogido (E3). Las familias tienen que facilitar al menor el entorno más apropiado para él y, además, en muchas situaciones tienen que educar a este porque sus familias no lo han hecho. No es una labor fácil y todo ello supone un gran esfuerzo para las familias de acogida (E1). De

modo que, los profesionales deben valorar la capacidad y las herramientas educativas de las familias acogedoras para garantizar el entorno más adecuado.

De esta manera, la valoración de idoneidad de los solicitantes se realiza teniéndose en cuenta, con carácter general, los criterios²⁵ de valoración positiva y negativa. En cuanto a la valoración positiva los/as trabajadores/as sociales valorarán la estabilidad y madurez emocional de los solicitantes que permitan el desarrollo armónico del menor, la capacidad para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos del menor. También valoran la existencia de motivaciones y actitudes adecuadas para el acogimiento, la relación estable y positiva de la pareja, en caso de solicitudes conjuntas y la aptitud básica de los mismos para la educación del menor. También se tendrá en cuenta el adecuado ajuste entre el deseo de los solicitantes de ser padres y el de dar respuesta al derecho del menor de tener una familia, flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a nuevas situaciones. Y, por último, la capacidad de ofrecer un ambiente familiar que favorezca el desarrollo integral del menor y disponer de una vivienda adecuada. En relación a los criterios de valoración negativa que deben seguir los profesionales son los siguientes: la existencia de problemas de salud física o psíquica, en la medida en que puedan afectar al proceso de acogimiento y crianza del menor, la diferencia de más de cuarenta y dos años de edad entre solicitantes y menor adoptando, en caso de pareja, se tendrá en cuenta la edad del miembro más joven. No obstante, en el caso de solicitantes que ya tengan hijos, y cuando así lo soliciten, se procurará que el menor sea de edad inferior al hijo de menos edad de los solicitantes, siempre que la diferencia de edad con el adoptando más joven no supere los cuarenta y cinco años. También se valorará la existencia de motivaciones inadecuadas para el acogimiento; los desajustes graves en la relación de pareja de los futuros adoptantes; el rechazo a asumir los riesgos inherentes a la adopción y la presencia de expectativas rígidas respecto al menor y a su origen socio-familiar. Asimismo, se contará como aspectos negativos cuando la familia no cuente con alguno de los criterios de valoración positiva comentados con anterioridad (E3).

A lo largo de la valoración, los/as trabajadores/as sociales elaborarán junto a los/a psicólogos/as un informe psicosocial con los datos aportados a través del proceso y de las entrevistas que se llevan a cabo. En esta línea, los profesionales harán hincapié en el tipo de ofrecimiento de las familias acogedoras. Con la finalidad de que se ajuste el ofrecimiento de las personas valoradas a las características del menor, dando cobertura de esta manera a sus necesidades específicas, favoreciendo su desarrollo integral mediante la convivencia familiar apropiada (Dirección General, 2019). En la propuesta de ofrecimiento que realiza la familia se establece el perfil del menor que se ofrecen a acoger en función de las capacidades y contexto de la familia, así como la modalidad

²⁵ El DECRETO 188/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores hace referencia a los criterios de valoración en los procesos de adopción. No obstante, debido a que Aragón no dispone de una legislación propia para el acogimiento familiar los profesionales hacen uso de los criterios previstos para la adopción.

del acogimiento que se llevará a cabo (urgente, temporal o permanente). Se hace mención especial al tipo de acogimiento y al perfil en varias ocasiones a lo largo del proceso para que los profesionales del equipo de valoración observen las capacidades educativas de la familia en función de este (E1). Una vez que ya se ha valorado la idoneidad o no de las familias, así como el ofrecimiento, los/a trabajadores/as sociales emiten un informe de resolución de idoneidad. Cabe destacar que siempre se intenta que este sea idóneo proporcionando a la familia las herramientas que precisen para la mejor educación del niño. Pero en ocasiones esa resolución puede ser no idónea y en este caso la familia dispone de diez días naturales para formular alegaciones y presentar la documentación que se estime oportuna (IASS, 2020). Los profesionales en esta fase encuentran grandes dificultades a las que tienen que hacer frente justificando el por qué son adecuados o no en función de las características del niño y de los criterios de valoración. Todo ello supone asumir la responsabilidad de garantizar al menor el entorno más adecuado para él, puesto que se han dado casos en los que las familias que habían sido declaradas idóneas se han visto superadas por la situación y han tenido que cesar el acogimiento antes de tiempo (E3).

La declaración de idoneidad tiene vigencia de tres años desde la fecha de su emisión, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y facilitar las gestiones de las familias, se establece un procedimiento abreviado para la renovación de la idoneidad. Por lo que una vez pasados los tres años desde la emisión del informe el equipo de valoración (trabajador/a social y psicólogo/a) llevará a cabo la renovación de la idoneidad de las familias. Los profesionales programarán el número de entrevistas a la familia, el modo de llevarlas a cabo y la documentación que consideren necesaria en ese momento, en función del conocimiento que tienen de la situación sociofamiliar (E3). Por lo tanto, solo se requiere la manifestación escrita de la familia de su propósito de renovar y aquellos documentos que el técnico considere necesarios. A lo largo de este proceso los profesionales deben volver a evaluar a la familia con objeto de comprobar si todavía subsisten las circunstancias que motivaron el acogimiento (E3). Una vez reunidos los requisitos para proceder a la renovación de la familia, los profesionales notificarán el informe a la Gerencia del IASS para que posteriormente se emita la resolución de idoneidad de la familia de acogida (IASS, 2020).

3.3.3 LA FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS DE FAMILIA DE ACOGIDA Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Una vez que las personas han sido declaradas aptas para formalizar un acogimiento serán inscritas en la bolsa de familias de acogida. De este modo todas las familias tanto extensas como ajenas que son declaradas idóneas quedan registradas en la bolsa, permitiendo acceder a la información en cualquier momento y donde quedan registrados los antecedentes de cada una de las familias. El mantenimiento de la bolsa lo realizan los/as trabajadores/as sociales del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del

Gobierno de Aragón. Estos profesionales se encargan del control y seguimiento de la bolsa, así como de registrar los datos básicos de la familia y la tipología en la que se ofrecen con el fin de conseguir una coordinación con las direcciones provinciales (E2). Esta coordinación es imprescindible ya que, las familias pueden acoger a menores de las diferentes provincias de la comunidad. La trabajadora social del Servicio de Atención a la Infancia encargada del mantenimiento de las bolsas estableció que se encuentran dificultades a la hora de realizar el mantenimiento y coordinación de la bolsa puesto que está formada por familias de las tres provincias. De modo que, cada uno de los profesionales de las diferentes provincias debe enviar la información referente a la bolsa a los profesionales del Servicio de Atención a la Infancia para que estos registren la documentación en la bolsa (E1). De esta manera, los/as trabajadores/as sociales deben tener la bolsa actualizada con la información recibida y a su vez, los profesionales tienen que enviarla a los/as trabajadores/as sociales encargados del mantenimiento de la bolsa para que estos la registren. Debido a la carga de trabajo de todos los profesionales en ocasiones ello dificulta la coordinación entre unos y otros y causa que la bolsa no esté actualizada a tiempo real (E2).

Los/as trabajadores/as sociales también son los encargados de realizar las campañas de sensibilización con el fin de captar el interés de las personas en acoger a un menor y generar conciencia sobre la figura del acogedor (E2). Esta función comprende una gran dificultad ya que se debe conseguir concienciar y sensibilizar a la población sobre la funcionalidad del acogimiento familiar con el fin de aumentar el número de familias acogedoras. Los profesionales deben transmitir información clara y comprensible para la población, relevante y concreta en sus contenidos con un itinerario de fácil acceso para las personas que estén interesadas (E2).

3.3.4 LA FUNCIÓN EN LA ADAPTACIÓN DEL MENOR A SU FAMILIA DE ACOGIDA

Una vez emitida la declaración de idoneidad de la familia y realizada la inscripción en la bolsa de acogida, la familia ya podrá iniciar un proceso de acogimiento familiar. En este caso, el/la trabajador/a social se encarga de realizar una ficha del menor con las características del mismo con el fin de facilitar la coordinación con los diferentes profesionales que participan en el proceso de adaptación. La función que realiza el/la trabajador/a social con la ficha del menor es de gran relevancia para preservar el interés superior del mismo y todos sus derechos puesto que, permite que el menor sea escuchado por los profesionales (E3). La ficha del menor permite a los profesionales escuchar los sentimientos y opiniones del menor para preparar un acogimiento acorde a sus circunstancias. A través de esta ficha se establece la situación en la que se encuentra y cómo ha llegado a esta situación, así como aspectos relevantes que pudieran concurrir. El profesional una vez haya realizado la ficha del menor la envía a ADAFA²⁶ que es la

²⁶ ADAFA es la asociación de familias de acogida de Aragón. Una asociación sin ánimo de lucro formada por familias de acogida que trabaja para que ningún niño o niña se quede sin el derecho a vivir en familia

encargada de realizar la valoración de los menores. En esta fase de adaptación se realiza también una valoración del menor que se lleva a cabo por los/as educadores/as sociales de las entidades privadas por lo que el/la trabajador/a social no participa en ella. El principal problema de ello es que el/la trabajador/a social es el/la que realiza la ficha del menor por lo que conoce de primera mano el contexto del niño. Esto es contradictorio puesto que los profesionales que evalúan al menor no conocen de primera mano su situación, sino que se rigen por los contenidos de la ficha del mismo (E3).

Una vez valorado el menor y la familia los/as trabajadores/as sociales elaboran un informe con los datos del acogimiento, así como su tipología, y este se notifica al Consejo Aragonés de Adopción. Cuando el Consejo acepta el acogimiento los/as trabajadores/as sociales planifican la incorporación del menor a su nueva familia. Si el acogimiento es de urgencia esta fase no se lleva a cabo debido a la exigencia del mismo, pero sí se realiza en las demás tipologías. Los profesionales solicitan a las familias que aporten fotografías de ellos mismos, de la vivienda donde se llevará a cabo el acogimiento, de la mascota en su caso etc. (E3). Así pues, los/as trabajadores/as sociales planifican un primer encuentro en el que el niño podrá ver las fotografías y hacerse una idea de cómo es la familia. Además, los profesionales explicarán a la familia las características del menor y su situación. Este periodo de adaptación da lugar a desajustes emocionales y temores por parte de los niños. Este primer contacto es muy importante y será clave para establecer el éxito del acogimiento, se realiza en un corto periodo de tiempo ya que simplemente tiene la finalidad de que ambas partes interactúen y se conozcan. La fase del proceso de adaptación supone grandes dificultades a los profesionales que trabajan en ella ya que pueden verse afectados psicológicamente y tener altos niveles de estrés. Esto se debe a que van a vivir el dolor del menor por la pérdida de su familia de origen y, a su vez, también son conscientes del miedo de la familia acogida por las dudas que tienen en cuanto a lo que se enfrentan (E3). Es preciso mencionar que, la figura del trabajador social solo aparece en esta primera fase de incorporación del menor a su familia puesto que, en las siguientes sesiones son los educadores sociales los que las llevan a cabo. De esta manera, el seguimiento a la familia²⁷ se lleva a cabo por los educadores sociales del IASS y de entidades privadas. Así pues, el seguimiento de familia ajena lo lleva a cabo la entidad ADAFA y el de familia extensa ALDEAS SOS²⁸.

El niño vive la separación de su núcleo familiar como un castigo por lo que, los profesionales deben acompañar al mismo en esta situación y proporcionarle el entorno

sabiendo que esta le proporciona la protección, el afecto y la seguridad necesarias para desarrollarse como persona.

²⁷ Es preciso mencionar que en otras comunidades autónomas como sería el caso de Cataluña son los propios trabajadores sociales los que realizan el seguimiento a las familias tanto ajena como extensa y a su vez, también llevan a cabo el seguimiento de la evolución del menor (Solé, 2019).

²⁸ Aldeas Infantiles SOS es “una organización de atención directa a la infancia que se encarga de atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias” (Aldeas Infantiles SOS).

adecuado para su desarrollo (Solé, 2019). A ello hay que añadir los miedos y preocupaciones del menor sobre su origen y la sensación de posibles rechazos por parte de la familia de acogida. De esta manera, considero un problema que la figura del trabajador social no realice el seguimiento de las familias ni del menor ya que, el/la trabajador/a social ha participado a lo largo de todo el proceso del acogimiento por lo que conoce de primera mano la situación del menor y del contexto familiar y podría aportar mucho al seguimiento de ambos. No obstante, aunque la figura del trabajador social no aparece durante el seguimiento del proceso de acogimiento, sí intervendrá cuando la situación lo requiera. Esto es, si se diese el caso en el que surgen dificultades durante un acogimiento de tipología temporal o permanente y se tuviese que volver a valorar la situación de la familia (E3). Así como, cuando se modifica la modalidad del acogimiento de uno de urgencia a uno temporal, el/la trabajador/a social tendrá que volver a valorar la situación de la familia y explicar las diferencias que conlleva el cambio (E3). Estas diferencias entre otras, sería principalmente que la compensación económica al pasar de una modalidad urgente a una temporal se reduce considerablemente. Esta diferencia en la compensación económica se considera un problema ya que ello condiciona en diversas ocasiones la modalidad que escogen las familias para llevar a cabo el acogimiento (E3).

Por otro lado, también se considera una problemática que los/as trabajadores/as sociales no tengan contacto con la familia biológica del menor ya que, en muchas ocasiones estas tienen dificultades económicas, problemas de drogodependencia, falta de herramientas educativas... De modo que el profesional podría trabajar con la familia para que pudiese disponer de ingresos estables y una economía estable para que pueda generar un plan de intervención. Asimismo, se ayudaría a que se pudiese valorar el retorno del menor a su familia y capacitar a la familia para dotarles de estabilidad y seguridad (E2).

3.3.5 LA FUNCIÓN EN LA VALORACIÓN POST-ACOGIMIENTO

La finalización del acogimiento tanto si es consecuencia de un proceso que se ha llevado a cabo con una preparación previa como si ha sido algo inesperado consecuencia de un fracaso en el proceso de acogimiento, debe ser cuidadosamente preparado con cada una de las partes implicadas: menor, familia acogedora y familia biológica. Hay que tener en cuenta las necesidades y los sentimientos de cada una de estas partes para que la ruptura sea vivida de una forma lo más natural posible; trabajar todos estos aspectos es uno de las funciones clave de los técnicos responsables del programa de acogimiento familiar (Programa de Acogimiento Familiar, 2010).

El/la trabajador/a social se encarga de elaborar junto al psicólogo/a un informe psicosocial del cese del acogimiento que debe ser presentado al Consejo con el fin de que este lo acepte y se haga efectiva la salida del menor de su familia de acogida. La burocracia en este momento se convierte en un problema para los profesionales puesto

que, los plazos para aceptar el informe elaborado se incrementan provocando el retraso en la efectividad de la salida del menor de su familia acogedora (E2). En el informe presentado por los profesionales debe aparecer el motivo del cese del acogimiento, los datos personales de las partes implicadas en él, los antecedentes del caso, así como, la situación actual en la que se encuentra tanto el menor como la familia acogedora y, por último, se establece la propuesta del cese (E3). Es preciso mencionar que la salida del menor se realizará a posteriori de la aceptación del Consejo, hasta que el mismo no acepte el cese no se iniciará el proceso. Además de realizar el informe psicosocial los/as trabajadores/as sociales llevan a cabo una valoración post-acogimiento de la familia acogedora. En esta fase también es preciso destacar que se considera un problema que el/la trabajador/a social no tenga contacto con la familia biológica ya que, de esta manera no se lleva a cabo una valoración de la misma (E2). Los profesionales no pueden escuchar los sentimientos de la familia biológica, ni valorar cómo ha sido su evolución para, en los casos que así se precise, el retorno del menor a su núcleo familiar.

Sin embargo, los/as trabajadores/as sociales sí realizan una valoración posterior al acogimiento de la familia de acogida. Todo ello conlleva revisar con la familia su disposición e idoneidad para realizar nuevos acogimientos y, en cualquier caso, valorar un posible tiempo de descanso antes de un nuevo acogimiento (IASS, 2020). Es en este momento cuando los/as trabajadores/as sociales vuelven a intervenir en el proceso. Esta fase cumple una doble finalidad ya que la familia percibe que es escuchada y puede transmitir aquellos aspectos que considera relevantes sobre la evolución del acogimiento realizado. Por otro lado, esta valoración permite a los profesionales entablar una relación más estrecha y cercana con la familia a la vez que se convierte en una fuente de conocimiento (E3). Los/as trabajadores/as sociales deben tener en cuenta cómo se siente la familia tras haber realizado el acogimiento, puesto que el proceso supone una carga tanto emocional como física, así como, la disponibilidad de la familia a las necesidades del menor, la dedicación e implicación personal para la cobertura de las necesidades, la adaptación de las dinámicas familiares (incluidos con los hijos biológicos). Todo ello supone un factor clave a la hora de acordar con la familia acogedora la conveniencia de su continuidad o la necesidad de un respiro antes de reincorporarse nuevamente a la misma y/o la modificación de su ofrecimiento (edad del menor, temas de salud, tipo de acogimiento...) por las nuevas circunstancias socio-familiares (IASS, 2020). Por lo que esta valoración post-acogimiento es muy importante para los profesionales y en concreto para los/as trabajadores/as sociales que reciben el sentir de la familia, así como las vivencias de esta en relación al acogimiento (IASS, 2020). De modo que los profesionales pueden orientar a la familia en función del ofrecimiento al que están dispuestos asumir y detectar las fortalezas o debilidades de la situación socio-familiar. En el caso de que se detectasen debilidades, los/as trabajadores/as sociales se encargarán de dotar a la familia de las herramientas adecuadas para superarlas. A su vez, este proceso de valoración post-acogimiento se convierte en un instrumento muy importante ya que permite a la familia mejorar la

calidad de los acogimientos que realice más adelante, así como, aprender de los errores que pudiesen haberse cometido a lo largo del acogimiento.

En definitiva, el papel que cumple el/la trabajador/a social en los procesos de acogimiento familiar es de gran relevancia puesto que, la praxis de estos profesionales se encuentra presente durante la mayor parte del proceso y en especial en la valoración de idoneidad de las familias. Los/as trabajadores/as sociales llevan a cabo la función de valoración de las familias acogedoras con la principal finalidad de insertar al menor en un entorno familiar adecuado para su pleno desarrollo. Además de proporcionar a las familias acogedoras las herramientas educativas adecuadas para cubrir las necesidades del menor. Así como, que estas familias acogedoras se sientan escuchadas y cuenten con el apoyo de los profesionales a lo largo de todo el proceso del acogimiento.

4 CONCLUSIONES

En vista de todo lo expuesto anteriormente y como cierre del presente trabajo de fin de máster sobre el trabajo social en el acogimiento familiar me gustaría destacar algunas conclusiones. El objetivo principal del presente trabajo era fundamentalmente conocer las funciones que cumple el/la trabajador/a social en el contexto del acogimiento familiar. Así pues, como primera conclusión que se puede extraer es la función esencial que caracteriza la intervención de los/as trabajadores/as sociales estudiando y valorando la estructura sociofamiliar de las familias acogedoras. El papel que cumple el profesional valorando la idoneidad de las familias es de gran relevancia puesto que permite preservar el interés superior del menor proporcionándole un entorno adecuado para su desarrollo integral. No obstante, el proceso de valoración es un proceso complejo donde valorar la idoneidad de las familias para acoger conlleva una gran responsabilidad para los profesionales. Esta actuación tiene una gran importancia en la elección de las familias idóneas que practican el acogimiento, puesto que es necesario ejercer un juicio preciso, sobre la idoneidad de las familias.

Los/as trabajadores/as sociales se encargan de guiar el camino donde el menor se incorporará a una familia, pero no acompañan directamente al menor, puesto que esta labor la realizan los/as educadores/as sociales. Considero un problema que no aparezca la figura del trabajador social en este proceso ya que es un valor añadido para cuidar y tranquilizar a las familias acogedoras transmitiéndoles el apoyo que necesitan. De modo que, es importante que las familias conozcan a los profesionales implicados en todo el proceso puesto que ayudaría a transmitirles más confianza y, en definitiva, estar mejor preparados para afrontar un acogimiento. En esta línea, es preciso destacar que a raíz de la elaboración del presente trabajo se ha conocido que el/a trabajador/a social tampoco mantiene contacto con la familia biológica del menor. Esto se considera un problema ya que en su mayoría las familias presentan problemas económicos o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social donde el trabajo social tiene plena capacidad de actuación.

El/la trabajador/a social a su vez, también cumple una función esencial en los procesos de acogimiento familiar una vez ha terminado el mismo. Los profesionales realizan la valoración post-acogimiento considerada de gran relevancia para las familias de acogida y correlativamente para los menores puesto que esta valoración servirá para aprender de los errores cometidos y mejorar la calidad de posteriores acogimientos. Los/as trabajadores/as sociales cumplen una doble finalidad en esta fase permitiendo que la familia sea escuchada transmitiendo aquellos aspectos más relevantes sobre la evolución del acogimiento, así como, entablar una relación más cercana con la familia convirtiéndose de este modo en una fuente de información.

Asimismo, también es importante destacar la función que cumple el/la trabajador/a social conciliando el interés superior del niño, el derecho a ser escuchado y la preferencia por la permanencia en su núcleo familiar. En diversas ocasiones, los deseos del niño y la preferencia por la permanencia con su familia no se ajustan a su interés superior y se precisa la separación del menor de su familia biológica porque la permanencia en ella atentaría contra su interés superior. De modo que, deben ser estos profesionales los que determinen cuando es necesaria la separación y cuando el niño puede permanecer en su núcleo familiar y, a su vez, deben transmitirle las razones de las decisiones adoptadas para que sean comprendidas y entendidas como justas y adecuadas.

Por otro lado, haciendo referencia al objetivo planteado de analizar la legislación aplicable del acogimiento familiar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico se han extraído las siguientes conclusiones. En primer lugar, la Ley 26/2015 de ámbito nacional supuso un gran avance para la formalización del acogimiento familiar frente al residencial puesto que este último se configura como una medida de protección subsidiaria a adoptar solo en los casos en que sea inoportuno el acogimiento familiar por no preservar el interés superior del menor. De modo que, la Ley 26/2015 introduce como novedad que los menores de tres años no ingresarán en centros de protección, sino que vivirán siempre con una familia, así pues, se procurará también para los mayores de tres años que la familia de acogida sea la primera opción. Esta preferencia por el acogimiento familiar es de gran relevancia puesto que, un entorno familiar siempre es el ambiente más favorable para el desarrollo de un menor en situación de desamparo. En segundo lugar, la Ley 26/2015 introduce la vinculación del interés superior del menor, que ya había sido incorporado como primordial en todas las actuaciones en torno al mismo, con la necesidad de transmitir información al menor acerca de su situación, sus derechos y, sobre todo, el derecho a ser oído. En esta línea, la Ley 26/2015 introduce la previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. Es en este momento donde se da especial importancia al papel que cumple el/la trabajador/a social en el acogimiento puesto que son estos profesionales los que llevan a cabo la valoración de idoneidad de las familias. Por último, en relación a la legislación vigente en materia de acogimiento familiar en la comunidad autónoma de Aragón, es preciso mencionar que resulta insuficiente puesto que los profesionales entrevistados coincidían en que

muchas de las actuaciones que llevan a cabo se amparan en legislación vigente en materia de adopción y ellos deben aplicarla al acogimiento familiar.

Considero oportuno mencionar las dificultades encontradas a la hora de realizar el presente trabajo en relación a la escasa bibliografía relacionada con el trabajo social y el acogimiento familiar. En mi opinión, considero necesario que se dedique más tiempo a la investigación y la sistematización de las intervenciones de los/as trabajadores/as sociales en los procesos de acogimiento familiar para realizar más aportaciones con la finalidad de conseguir una mayor visibilidad de la profesión en el ámbito de la protección de menores y, posteriormente una mejora en las intervenciones futuras con los mismos. A su vez, también se han encontrado dificultades a la hora de realizar las entrevistas puesto que no se recibía respuesta por parte de los profesionales del sector privado, y ello ha limitado la investigación. Por lo tanto, la información obtenida pertenece a las funciones que realizan los/as trabajadores/as sociales que intervienen en el acogimiento familiar desde el ámbito público.

Para finalizar este apartado me gustaría mencionar que el trabajo social es una profesión que en muchas ocasiones está infravalorada, a la que se la ve como una profesión de meros trámites administrativos y burocráticos. No obstante, como se ha podido demostrar a lo largo del presente trabajo es una de las piezas fundamentales en los procesos de acogimiento familiar desarrollando una amplia variedad de funciones.

5 BIBLIOGRAFÍA

Abad, E. (2020). Revisión del acogimiento a la luz de las modificaciones legislativas en materia de protección del interés superior del menor en España. *Revista de Derecho Privado*, (40), 173-200.

Aldeas Infantiles SOS. (2021). Recuperado de: <https://www.aldeasinfantiles.es/>

ADAFa. (2017). Memoria actividades ADAFA. Recuperado de: <https://www.adafa.es/wp-content/uploads/2019/05/Memoria-Actividades-2017.pdf>

Allueva, L. (2011). Situaciones de riesgo y desamparo en la protección de menores. *Revista para el análisis del Derecho*, (4), 25. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3906567>

Bravo, A., Del Valle, J., López, M y Monserrat, C. (2008). El acogimiento familiar en España. Una evaluación de resultados. *Observatorio de la Infancia*, (6), 19-42.

Becerril, S. (2014). *Estudio sobre la escucha y el interés superior del menor. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia*. Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo. Recuperado de: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2014-05-Estudio-sobre-la-escucha-y-el-interes-superior-del-menor.pdf>

Carvalho, J., Delgado, P., Del Valle, J y López, M. (2014). Características y desarrollo del acogimiento familiar en dos países con fuerte tradición de acogimiento residencial: España y Portugal. *Universitas psychologica*, 13(3), 865-880. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4990863>

Cuartero, M.J, García I, Pérez Ana. (2017). *Regulación normativa del acogimiento familiar*. IASS. Gobierno de Aragón.

Código Deontológico de Trabajo Social. (2012). Recuperado de: <http://www.trabajosocialburgos.org/codigodeontologico.php>

De la Paz, M. Y Saldías, P. (1998). Modelos de Intervención para el Trabajo Social. Santiago de Chile. Recuperado de: http://biblioteca-digital.ucsh.cl/greenstone/collect/libros_respaldofull/index/assoc/HASH9e9c.dir/Modelo%20de%20intervencion.pdf

Dirección General de Servicios para las familias y la infancia. (2019). Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Recuperado de:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/Documentos_Tecnicos/PDF_D OCS TCOS/Criterios de cobertura calidad y accesibilidad en acogimiento familiar.pdf

Del Fresno, M. (2011). Retos para la intervención social con familias en el siglo XXI: Consumo, ocio, cultura, tecnología e hijos. *Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales*, (1), 137-139. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3851521>

Escartín, M.J. (1992). *Manual de Trabajo Social (Modelos de práctica profesional)*. Aguacilara.

Fernández, T. y Ponce de León L. (2011). *Trabajo Social con Familia*. Alianza Editorial.

Fernández, J.M. (2017). Protección a la infancia: una visión desde el Consejo General del poder judicial respecto de las últimas reformas en M.V. Mayor (Ed), *El nuevo régimen jurídico del menor* (67-85). Aranzadi.

Fernández, J. (2018). Documento de bases para la intervención con las familias desde el Trabajo Social. Monográfico de Trabajo Social. *Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña*, (12), 294.

Frigola, F. y Solé, J. (2019). El trabajo social y educativo en los procesos de acogimiento familiar en J. Solé (Ed), *Familias de acogida* (115-155). Ned.

IASS. (2020). Programa de Acogimiento Familiar memoria 2015/2020. Recuperado de: <http://atencionmenores.blogspot.com/search?q=+memoria+acogimiento>

Konvalinka, N. (2012). *Modos y maneras de hacer familia: Las familias tardías, una modalidad emergente*. Biblioteca Nueva.

Libro Blanco de Trabajo Social. (2004). Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Recuperado de: http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICER RECTORADOS/ESPACIOEURO/LIBROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANCO_TRBJSOCIAL_DEF.PDF

Martínez M. J. (2005). *Modelos teóricos del trabajo social*. Diego Marín librero editor SL.

Mayor, M. (2017) El nuevo acogimiento: régimen jurídico tras la Ley 26/2015, de 28 de julio en M.V Mayor (Ed), *El nuevo régimen jurídico del menor* (115-147). Aranzadi.

Merton, R. (1970). Estructura social y anomia: Revisión y ampliación en E. Fromm (Ed), *La familia* (67-106).

Mondragón, J, Trigueros, I. (1993). *Manual de prácticas de Trabajo Social con menores*. SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S.A

Moreno, R. (2012) *Acogimiento Familiar*. DYKINSON, S.L.

Ocon, J. (2003). Evolución y situación actual de los recursos de protección de menores en España. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, (45), 13-30.

Perlman, H.H. (1957). *Social Casework: A Problem-Solving Process*. University of Chicago.

Programa de Acogimiento Familiar (2010).
<https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20FAMILIAR.pdf>

Roigé, X. (2006). *Familias de ayer, familias de hoy: continuidades y cambios en Cataluña*. Icaria.

Solé, J. (2019). *Familia de Acogida*. NED ediciones.

Web del Gobierno de Aragón. Instituto de Servicios Sociales (IASS). Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Menores. Acogimiento familiar. Recuperado de http://iass.aragon.es/menores/menores_nopreadoptivo.htm

Verdera, B. (2017). El interés del menor versus interés familiar e interés particular de los progenitores en M.V Mayor (Ed), *El nuevo régimen jurídico del menor* (pp 519-533). Aranzadi.

Viscarret, J.J. (2007). *Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social*. Alianza Editorial.

- LEGISLACIÓN

Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Boletín Oficial del Estado, núm 275, de 17 de noviembre de 1987. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25627>

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Boletín

Oficial del Estado, núm 15, de 17 de enero de 1996. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069>

Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 20 de julio de 2001, núm. 86. Recuperado de: <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=179788822626>

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial del Estado, núm 175, de 23 de julio de 2015, pp 61871 a 61889. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Boletín Oficial del Estado, núm 180, de 29 de julio de 2015. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470>

DECRETO 188/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores. Boletín Oficial de Aragón, 7 de octubre de 2005, núm. 120. Recuperado de: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=DECRETO+188/2005&SECC=C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS

DECRETO 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo. Boletín Oficial de Aragón, 23 de octubre de 2008, núm. 174. Recuperado de: <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=303952021111>

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Boletín Oficial del Estado, núm 313, de 31 de diciembre de 1990, páginas 38897 a 38904. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312>

Observación General N° 12. (2009). El derecho del niño a ser escuchado. UNICEF.

Observación General N° 14. (2013). Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). UNICEF.

ORDEN CDS/751/2017, de 29 de mayo, por la que se regulan las compensaciones económicas para acogimientos familiares de menores en Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 9 de junio de 2017, núm. 109. Recuperado de: <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966088462727>

ORDEN CDS/530/2018, de 23 marzo, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación del servicio de Apoyo Integral al Programa de Acogimientos Familiares en Familia Ajena en sus

modalidades de urgente y temporal para menores en desprotección. Boletín Oficial de Aragón, 4 de abril de 2018, núm. 65. Recuperado de: <http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013035065151>